

27.ª SESION ORDINARIA — AGOSTO 20 DE 1885

Presidencia del señor **MADERO**

Ministro presente: de justicia, culto e instrucción pública.

Senadores presentes: Alvear, Baltoré, Barros, Cambaceres, Cello, Dávila, Febre, Gelabert, Igarzábal, Méndez, Navarro, Nogués, Oliva, Ortiz, Rocha, Rodríguez, Rojas, Santillán y Zapata.

Senadores ausentes, con licencia: Avellaneda, Civit, del Valle, Gil y Moyano.

Senadores ausentes, con aviso: Baibiene, Carrillo, Cortés, Juárez Celman y Pizarro.

Senador ausente, de la Capital: Bárcena.

SUMARIO

1

Cámara de Diputados

- 1.—Asuntos entrados.
- 2.—Moción de preferencia del señor senador Igarzábal para considerar el proyecto de ley en revisión de la Comisión de Negocios Constitucionales, por el que se fijan las bases para la celebración de tratados de extradición de criminales. Se aprueba.
- 3.—Continuación de la consideración del proyecto de ley organizando la Administración de Justicia en la capital de la República.
- 4.—Cuarto intermedio.
- 5.—Continúa la consideración del asunto a que se refiere el número 3 del sumario.

—En Buenos Aires, a veinte de Agosto de mil ochocientos ochenta y cinco, reunidos en su sala de sesiones el señor presidente y los señores senadores arriba inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores senadores Avellaneda, Civit, del Valle, Gil y Moyano, con licencia; Bárcena, ausente de la Capital; Baibiene, Carrillo, Cortés, Juárez Celman y Pizarro, con aviso.

Leída y aprobada el acta de la anterior de 11 del corriente (26ª ordinaria), se dió cuenta de los asuntos entrados, a saber:

Nueve notas pasando en revisión los siguientes proyectos de ley:

1º Abriendo un crédito al Departamento del Interior por la suma de \$ 45.940,58 para el pago de expedientes. A la Comisión de Hacienda.

2º Acordando pensión a la señora Serafina López de Sánchez.

3º Declarando comprendidas en la ley de pensiones militares de 4 de Julio de 1872 a las señoritas Andrónica y Zoila Urdininea. A la Comisión de Guerra.

4º Acordando pensión a doña Juana R. de Sánchez.

5º Jubilando al guardalmacén de aduana don Francisco Martínez.

6º Acordando pensión a doña Isidora B. de Pico.

7º Jubilando al guarda de la aduana de San Nicolás don Gil Medina.

8º Jubilando al comisario de policía de la Capital don Isidoro Acevedo. A la Comisión de Peticiones.

9º Declarando comprendida en la ley de pensiones de 1885 a doña Rosalía Silva. A la Comisión de Guerra.

Solicitudes particulares

2

Amalia M. de Bozzano pide la devolución de su anterior solicitud, pidiendo pensión graciable. Acordada sobre tablas.

—Emilio Achával solicita el pago de un crédito por valor de 7.955,85 pesos, por suministros a los colonos de Caroya.

—Guillermo A. Fappen solicita privilegio para el establecimiento de una asociación anónima para la construcción de casas en la Capital y sus alrededores. A la Comisión del Interior.

—Elvira Arzac de Suffern, viuda del comisario de policía de la Capital don A. Suffern, solicita pensión.

—El teniente 2º don Carlos R. Sarmiento solicita doble sueldo mientras duren sus estudios militares en Europa. A la Comisión de Peticiones.

Despachos de Comisión

La de Guerra, en el proyecto de ley en revisión por el que se acuerdan premios en tierras a los jefes, oficiales, etcétera, que formaron parte del ejército expedicionario al río Negro y río Neuquén en 1879, para el avance de las fronteras. A la orden del día.

—La misma, en los proyectos de ley en revisión prorrogando por seis meses el permiso concedido a dona Toribia L. de Iramain para residir en Europa; declarando comprendidas en los beneficios de la ley de pensiones de 4 de Julio de 1872 a las señoritas Justa. Santos y Asunción Araya; acordando pensión a la señora Jerónima M. de Rodríguez; en la solicitud de doña Catalina Ferré pidiendo aumento de pensión, y en la solicitud de la señora doña Natividad V. de Chenaut pidiendo el pago de pensiones atrasadas.

La de Peticiones, en las cuentas de Secretaría del ex prosecretario señor Millán; en los proyectos de ley en revisión acordando pensión a la señora Margarita M. de Castellanos; acordando pensión a la señora Paula Güiráldez de Pereira; jubilando al ordenanza de la Aduana don Venancio Ahumada; jubilando al administrador de correos de Salta don Mariano Zorreguieta; acordando jubilación al agente de policía don Pablo González; acordando pensión al ex sargento 1º de policía don José Fernández; en la solicitud de las señoritas Delfina y Adelina Ballesteros pidiendo pensión, y en la de la señora Arsenia C. de Gómez pidiendo pensión. A la orden del día.

Sr. Igarzábal. — Ruego a la Cámara se sirva hacer un paréntesis a la orden del día pendiente, para ocuparse de un proyecto despachado por la Comisión de Negocios Constitucionales.

Recordarán los señores senadores que hace poco el Senado reformó el proyecto sobre extradición, remitido para su revisión por la Cámara de Diputados, proyecto que ha vuelto en segunda revisión por no haberse aceptado dos de las modificaciones que introdujo el Senado.

Despachado por la Comisión de Negocios Constitucionales, y repartido también, me parece a la orden del día, en un instante podría convertirse en ley si la Honorable Cámara lo tomase en consideración como lo he indicado.

Por lo tanto, hago moción para que nos ocupemos de ese asunto con preferencia a la orden del día pendiente.

—Apoyada suficientemente esta moción, se vota y se aprueba.

—En seguida se lee:

Honorable señor:

Vuestra Comisión de Negocios Constitucionales ha tomado en consideración la nota de la Cámara de Diputados de 15 del corriente, comunicando la no aceptación de dos de las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley que fija las bases para la celebración de tratados de extradición; y, por las razones que expondrá el miembro informante, os aconseja no insistáis en dichas enmiendas.

Sala de la Comisión, Buenos Aires, Julio 28 de 1885.

Rafael Igarzábal. — José V. Zapata.

Buenos Aires, Julio 15 de 1885.

Al señor presidente del Honorable Senado.

Tengo el honor de comunicar al señor presidente que la Honorable Cámara que presido, en sesión de hoy, ha tenido a bien aceptar las modificaciones introducidas por el Honorable Senado al proyecto de ley que fija las bases a que debe sujetarse el Poder Ejecutivo al ajustar los tratados de extradición, exceptuando la intercalación en el artículo 1º de la frase que se indica en la nota del Honorable Senado, fecha

13 de Junio próximo pasado, y la agregación de un nuevo artículo bajo el número 33.

Dios guarde al señor presidente.

RAFAEL RUIZ DE LOS LLANOS.

Juan Ovando,
Secretario interino.

Proyecto de la Cámara de Diputados

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — El gobierno de la República Argentina podrá entregar a los gobiernos extranjeros, con la condición de reciprocidad, a todo individuo perseguido, acusado o conderado por los tribunales de la potencia requirente «siempre que se trate de un crimen o delito de los que se indican en la presente ley y de conformidad a las reglas en ella establecidas.»

Proyecto de ley del Senado

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — El gobierno de la República Argentina podrá entregar a los gobiernos extranjeros, con la condición de reciprocidad, a todo individuo perseguido, acusado o condenado por los tribunales de la potencia requirente, «con tal que el caso esté ajustado a las reglas establecidas en la presente ley».

«Artículo 33. — Los reos y los objetos de que habla el artículo 30 deberán ser entregados por la nación requerida, en su frontera o puerto de embarque, sin cargo alguno.» (*Suprimido por la Cámara de Diputados*).

Sr. Igarzábal. — Como se ha visto por la simple lectura que acaba de hacerse, lo que no ha aceptado la Honorable Cámara de Diputados, es la frase final del artículo 1º del proyecto del Senado, que dice: «con tal que el caso esté ajustado a las reglas establecidas en la presente ley», persistiendo siempre en la redacción del artículo 1º sancionado por aquella Cámara que dice: «siempre que se trate de un crimen o delito de los que se indican en la presente ley y de conformidad a las reglas en ella establecidas».

Como se ve, es cuestión de simple redacción.

El Senado había redactado el artículo en una forma más conforme con el texto de toda la ley; pero la Cámara de Diputados no ha creído conveniente aceptar esta modificación; y, como no es substancial, la Comisión de Negocios Cons-

titucionales aconseja a la Cámara no insista en su primitiva sanción.

El mismo consejo le da respecto al artículo 33, que no figuraba en el proyecto primitivo y que se introdujo en el proyecto por el Senado.

La Cámara de Diputados no ha aceptado este artículo, porque la mente de ella ha sido dejar que los gastos que se originen con motivo de la remisión de los individuos que deben ser objeto de extradición y de los objetos necesarios, sean estipulados en los tratados respectivos.

La Comisión cree también que no hay ningún inconveniente en que se deje esto como materia de los tratados y, como antes he dicho, aconseja también que no se insista en este artículo.

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se votará si la Cámara insiste en su primitiva sanción.

—Se vota y resulta negativa unánime, obteniendo igual resultado la segunda modificación.

Sr. Presidente. — Queda sancionado definitivamente el proyecto. Se va a pasar a la orden del día pendiente en la sesión anterior.

—Se lee el artículo que sigue:

3

Artículo 7º — La Cámara de lo Civil conocerá en última instancia:

1º De los recursos que se deduzcan contra las sentencias definitivas de los jueces de 1ª instancia en todo juicio ordinario.

Sr. Ortiz. — La redacción de este inciso responde a la división de la Cámara de lo Civil en dos salas.

Como se ha suprimido esto en el proyecto actual, la redacción de este artículo debe quedar en estos términos: «De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces de 1ª instancia en lo civil.»

Digo esto porque aquí dice: «contra las sentencias definitivas de los jueces de 1ª instancia» y habiéndose suprimido la división en dos salas, de la Cámara de lo Civil, este inciso no debe quedar en esta forma.

Puede decirse que por un descuido de la Comisión no se ha corregido, y debe ponerse como

Agosto 20 de 1885

CAMARA DE SENADORES

30ª Reunión. 27ª Sesión ordinaria

está en la ley vigente: De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces de 1ª instancia en lo civil.

—Se lee el inciso en esta forma:

«De los recursos que se deduzcan contra las resoluciones de los jueces de 1ª instancia en lo civil.»

Sr. Presidente. — Se va a votar el inciso 1º en la forma que se ha leído.

—Se vota y es aprobado, como el que sigue:

2º De los recursos de fuerza.

—Se lee:

3º De los recursos contra las resoluciones de la municipalidad, en asuntos de carácter contencioso-administrativos.

Sr. Zapata. — He oído, señor presidente, a uno de los miembros de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que la aplicación de este artículo en la práctica le trae muchas dificultades, en presencia de otro artículo que figura en la ley orgánica de la municipalidad, en que se expresa que esta corporación conoce, con excepción de toda otra autoridad, en los asuntos que se refieren a la higiene, a la moral y a la seguridad públicas.

No podría yo dar a la Cámara en este momento todos los antecedentes que la Cámara de Apelaciones ha prometido suministrarme, para que se modifique este artículo convenientemente, de manera que en la práctica esas disposiciones verdaderamente contradictorias, no ofrezcan en adelante las dificultades que hoy ofrecen.

Por esta razón pediría a la Cámara que tuviera la deferencia de suspender la discusión de este inciso hasta otra sesión, comprometiéndome a tomar de los señores de la Cámara de Apelaciones los antecedentes necesarios y presentárselos a la Comisión para que modifique este inciso.

Sr. Presidente. — Si no hay observación en contrario, se suspenderá la discusión del inciso 3º.

—Quedó suspendida.

—Se leen y se dan por aprobados los siguientes:

4º De los recursos por retardación o denegación de justicia por parte de los jueces de primera instancia.

Art. 71. — La Cámara de lo Criminal, Correccional y Comercial conocerá en última instancia de los recursos contra las resoluciones de los respectivos jueces letrados.

Art. 72. — Las providencias de mera subalternación serán dictadas por el presidente de cada cámara o por quien lo reemplazare, pudiendo pedirse, en el término de tres días, reforma o revocatoria ante la Cámara, debiendo ésta resolver el caso sin más trámite.

Art. 73. — Las cámaras formarán tribunal con el presidente y dos vocales para la decisión de los recursos interpuestos contra las resoluciones interlocutorias que no revistan carácter definitivo, y sus resoluciones serán a simple mayoría.

Art. 74. — A los efectos del artículo precedente los vocales de cada cámara se turnarán mensualmente, y en caso de impedimento o recusación del presidente o vocales en turno, se subrogarán con los otros.

Art. 75. — Para juzgar en definitiva, las cámaras procederán con el número íntegro de sus miembros, pero podrán también hacerlo con tres o cuatro miembros en caso de impedimento o de recusación, siempre que las partes no pidiesen integración o el tribunal no lo ordenase.

Art. 76. — Las sentencias definitivas deberán fundarse en la opinión unánime de la mayoría del tribunal, aunque los motivos de esas opiniones sean diversos.

Art. 77. — En las causas criminales en que pudiera imponerse penas por más de diez años, la cámara respectiva sólo podrá conocer y resolver con el número íntegro de sus miembros, subrogándose al efecto por sorteo los vocales que resultasen impedidos o fuesen recusados por las partes.

Art. 78. — Cuando en las causas a que se refiere el artículo anterior hubiere de confirmarse meramente, con o sin costas, la sentencia del juez inferior, bastará la opinión uniforme de tres miembros, aunque difieran en sus motivos; pero si por esta sentencia hubiera de elevarse el tiempo de la pena impuesta por el juez inferior a más de diez años, será necesario la uniformidad de los cinco miembros en la decisión.

Art. 79. — La pena de muerte sólo podrá aplicarse por el tribunal íntegro y por unanimidad de votos.

Art. 80. — Contra las sentencias dictadas por las cámaras no habrá recurso alguno, con excepción de los casos previstos por el artículo 14 de la ley 14 de Septiembre de 1863 sobre jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales.

Art. 81. — Las cámaras de apelaciones que conozcan de cualquier causa, originariamente o en virtud de recurso, establecerán primero las cuestiones de hecho y en seguida las de derecho sometidas a su decisión, y votarán separadamente cada una de ellas en el mismo orden.

Art. 82. — El voto en cada una de las cuestiones de hecho o de derecho será fundado, y la votación principiará por el miembro del tribunal que resulte de la insaculación que al efecto debe practicarse.

Art. 83. — Cada cámara tendrá un secretario que autorizará con su firma las providencias, resoluciones y sentencias por ella dictadas.

Art. 84. — Las cámaras de apelaciones funcionarán todos los días hábiles. Las audiencias serán públicas a menos que razones de decoro requieran reserva, en cuyo caso deben declararlo así por medio de un auto.

Art. 85. — Las cámaras tendrán el tratamiento de «Excelentísima cámaras».

Art. 86. — Para ser miembro de las cámaras se requiere ser ciudadano mayor de treinta años, haber ejercido en el país durante seis años la profesión de abogado o desempeñado alguna magistratura o empleo judicial por lo menos durante tres años.

Art. 87. — Los jueces nombrados prestarán juramento de desempeñar sus funciones bien y fielmente, y en conformidad a lo que prescriben la Constitución y las leyes de la Nación, ante la Cámara para que fuesen designados.

Art. 88. — El nombramiento de los miembros de las cámaras será hecho por el presidente de la República con acuerdo del Senado.

Art. 89. — Cada Cámara nombrará su presidente. La designación se hará por elección entre los vocales.

Art. 90. — En caso de impedimento o reemplazamiento de alguno de los miembros de una de las cámaras, será reemplazado por uno de la otra cámara, designado por sorteo; y si todos los miembros de ésta estuvieren igualmente impedidos, su reemplazo se hará en la misma forma, con los jueces de primera instancia que no hubieren conocido en la causa.

Art. 91. — Cada cámara nombrará su secretario y demás empleados y los secretarios y empleados de los jueces de primera instancia

según corresponda a la jurisdicción y a propuesta de los jueces. La Cámara de lo Civil nombrará los secretarios y demás empleados de los juzgados de paz a propuesta de los jueces.

Art. 92. — No podrán ser simultáneamente jueces de una misma cámara los parientes o afines dentro del cuarto grado civil. En caso de afinidad sobreviniente, el que la causare abandonará su puesto.

Art. 93. — Las contiendas de competencia entre las cámaras serán decididas por la Suprema Corte de la Nación. En caso de producirse contienda oficial de competencia entre jueces de diversa jurisdicción, será resuelta en última instancia por la Cámara de Apelaciones de quien dependa el juez que primero hubiera conocido.

TITULO V

Disposiciones generales

Art. 94. — Cada cámara ejercerá superintendencia sobre los tribunales y funcionarios inferiores de su ramo y dictará los reglamentos convenientes para la mejor administración, sometiéndolos a la aprobación de la Suprema Corte, que ejercerá superintendencia sobre toda la administración de justicia. Para el ejercicio de la superintendencia serán citados todos los miembros del tribunal, bastando para formarlo la concurrencia de la mayoría.

Art. 95. — La superintendencia acordada a la Suprema Corte tiene por objeto velar por el buen desempeño de la administración de justicia, promoviendo las medidas que juzgase convenientes para el mejor servicio público e imponer penas disciplinarias para corregir aquellas faltas que por las leyes no estuviesen sometidas a penas mayores o al conocimiento de tribunales determinados; esas penas consistirán en apercibimientos o multas que no podrán exceder de 200 pesos.

Art. 96. — La superintendencia de las cámaras comprende:

- 1º Velar por el orden y disciplina de los tribunales, oficinas y funcionarios de su dependencia;
- 2º Imponer a los jueces inferiores y demás funcionarios penas disciplinarias por infracciones a los reglamentos internos de los tribunales, por faltas a la consideración y respeto a los magistrados, por actos ofensivos al decoro de la administración de justicia y por negligencia

cia en el cumplimiento de sus deberes, pudiendo aplicar las mismas penas previstas en el artículo anterior;

- 3º Tomar o proponer, según los casos, las medidas necesarias para que los registros y archivos de las oficinas públicas de la administración se conserven en buen estado y con toda seguridad.

Art. 97. — La autoridad policial de la Casa de Justicia estará a cargo del presidente de la Cámara de lo Civil; pero si funcionase en la misma casa la Corte Suprema, corresponderá esa autoridad a su presidente.

Art. 98. — A la Cámara de lo Criminal, Comercial y Correccional incumbe la visita de cárceles, que deberá hacerse trimestralmente por la cámara con todos sus vocales, y mensualmente por uno de sus miembros.

Art. 99. — Los miembros de las cámaras de apelaciones y los jueces de 1ª instancia no podrán ser separados de sus cargos sino por sentencia del Senado mediante acusación de la Cámara de Diputados.

Art. 100. — Las cámaras podrán reprimir con aperebimiento y pena de multa que no exceda de 100 pesos o arresto por 30 días, las faltas contra su autoridad y decoro ya sea en las audiencias o escritos.

Art. 101. — Corresponde a las Cámaras examinar las relaciones que les pasarán los jueces del movimiento de sus respectivos juzgados, debiendo en caso que notare negligencia o retardo, conminar a los jueces al cumplimiento de su deber; y cuando esas faltas fueren reiteradas las pondrán en conocimiento del Poder Ejecutivo para que éste dé cuenta a la Cámara de Diputados a los efectos consiguientes.

Art. 102. — Cada Cámara pasará anualmente al ministerio respectivo una memoria que contenga el movimiento de la administración de justicia, en su ramo correspondiente, observando los abusos e inconvenientes que hubiese notado en su marcha o en la aplicación de las leyes, y proponiendo todas aquellas medidas tendientes a su mejoramiento y a la más pronta y expedita marcha de la justicia.

TITULO VI

De los jueces federales

Art. 103. — Habrá dos jueces federales para el territorio de la Capital, de los cuales uno ejercerá la jurisdicción criminal y otro la mer-

cantil. La jurisdicción civil será ejercida por ambos turnándose mensualmente en el conocimiento de las causas que se inicien.

Los jueces federales conocerán en 1ª instancia de todos aquellos asuntos que con arreglo a la Constitución correspondan a la justicia nacional, en los siguientes casos:

- 1º Los que sean regidos especialmente por la Constitución Nacional, los tratados públicos con las naciones extranjeras, las leyes nacionales y que sancionare el Congreso, con excepción de las que se refieran al gobierno y administración de la Capital;
- 2º Las causas civiles en que sea parte un ciudadano argentino y un extranjero;
- 3º Las que versen sobre negocios particulares de cónsules y vicecónsules extranjeros;
- 4º Las cuestiones que se susciten entre particulares, teniendo por origen actos administrativos del gobierno nacional;
- 5º Las acciones fiscales contra particulares o corporaciones, sea por cobro de cantidades adeudadas o por cumplimiento de contratos, por defraudación de rentas nacionales o por violación de reglamentos administrativos, y en general todas aquellas causas en que la Nación o recaudador de sus rentas sea parte. En la precedente disposición, no se comprenden las acciones fiscales por cobro o defraudación de rentas o impuestos que sean exclusivamente para la Capital y no generales para la Nación;
- 6º Todas las causas a que den lugar los apresamientos o embargos marítimos en tiempo de guerra;
- 7º Las que se originen por choques o averías de buques, por asaltos hechos o por auxilios prestados en alta mar o en los puertos, ríos y mares en que la República tenga jurisdicción, si estuvieren más inmediatos a la Capital;
- 8º Las que se originen entre los propietarios o interesados de un buque, sea sobre su posesión o sobre su propiedad;
- 9º Las que versen sobre construcción y reparo de un buque; sobre hipoteca de su casco; sobre fletamentos y estadías, sobre seguros marítimos; sobre salarios de oficiales y marineros; sobre salvamento civil y militar; sobre naufragios;

sobre avería simple y gruesa; sobre contrato a la gruesa ventura; sobre pilotaje; sobre embargos de buques o penas por violación de las leyes de impuestos y navegación; sobre la nacionalidad del buque y legitimidad de su patente o regularidad de sus papeles; sobre arribadas forzosas; sobre reconocimientos; sobre abandono, venta y liquidación de créditos; del buque sobre cumplimiento de las obligaciones del capitán y tripulantes; y en general sobre todo hecho o contrato concerniente a la navegación y comercio marítimo;

10. De todas las causas de contrabando en los puertos o territorio de la Capital;
11. De todos los delitos cometidos en alta mar a bordo de los buques nacionales o por piratas extranjeros cuando los buques arribasen directamente a los puertos de la Capital;
12. Los delitos cometidos en los ríos, islas y puertos cuando el lugar donde fuese cometido el hecho quede más próximo a la Capital que el asiento de los demás jueces federales, o cuando los criminales se encuentren en el territorio de la Capital, a menos que en este último caso, otro juez federal hubiese intervenido en el asunto;
13. Los delitos cometidos en el territorio de la Capital en violación de leyes nacionales de carácter general para la República.

Art. 104. — Son aplicables las disposiciones contenidas en los artículos 4º y siguientes de la ley del 14 de Setiembre de 1863 sobre jurisdicción y competencia de los tribunales nacionales en cuanto no se opongan a la presente.

Art. 105. — La ley de procedimientos de 14 de Setiembre de 1863 y demás vigentes sobre justicia nacional, serán aplicables a los asuntos que se promovieren ante el juez federal de la Capital.

Art. 106. — Cada juzgado federal tendrá para su despacho y servicio dos escribanos de actuación, un oficial de justicia y un ordenanza.

Art. 107. — Para optar al puesto de escribano y oficial de justicia se requieren las mismas condiciones que para los de los juzgados de sección, y su nombramiento se hará en la forma prescriptas para éstos.

TÍTULO VII

Del Ministerio Público

Art. 108. — El Ministerio Público será desempeñado ante los tribunales de la Capital por un fiscal de las Cámaras de Apelación y por agentes fiscales ante los jueces de 1ª instancia.

Art. 109. — Corresponde al Ministerio Público:

- 1º Representar y defender la causa pública en todos los casos y asuntos en que su interés lo requiera;
- 2º Promover y ejercer la acción pública en las causas criminales y correccionales;
- 3º Requerir el cumplimiento de las penas impuestas y de las leyes relativas a presos y sentenciados;
- 4º Velar por el cumplimiento de las leyes, decretos y reglamentos y demás disposiciones que deben aplicar los tribunales, pidiendo el remedio de los abusos que notaren;
- 5º Defender la jurisdicción de los tribunales;
- 6º Intervenir en todos los negocios conducentes al orden público.

CAPÍTULO II

Agentes fiscales

Art. 110. — Corresponde especialmente a los agentes fiscales de lo criminal y correccional:

- 1º Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos que se cometieren en la jurisdicción de la Capital y que llegasen a su conocimiento por cualquier medio, pidiendo para ello las medidas que consideraren necesarias, sea ante los jueces o ante cualquier otra autoridad inferior, salvo aquellos casos en que por las leyes penales no sea permitido obrar de oficio;
- 2º Promover las acciones que correspondan contra la publicación y circulación de escritos, grabados o estampas que fueren contrarias a la moral pública;
- 3º Asistir al examen de testigos y verificación de otras pruebas en los procesos, y ejercitar todas las acciones y recursos previstos en las leyes penales y de procedimientos;

4º—Requerir de los jueces el activo despacho de los procesos, deduciendo en caso necesario los reclamos que correspondan;

5º Asistir a las visitas de cárceles y dar datos e informes a los jueces sobre las causas que estuviesen a su despacho.

Art. 111. — Corresponde a los agentes fiscales en lo civil, intervenir:

1º En todo asunto en que haya interés fiscal, a menos que la representación de esos intereses estuviese asignada a otra repartición administrativa;

2º En los juicios sucesorios, en los casos que por ley corresponda;

3º En las causas que interesen a los establecimientos de beneficencia u otras instituciones del Estado, cuando no tuvieren representante determinado por las leyes;

4º En las declinatorias de jurisdicción y contiendas de competencia;

5º En las causas sobre nulidad de matrimonios celebrados sin autorización de la iglesia católica o sobre divorcio entre los casados sin esa autorización;

6º En las causas sobre filiación y todas las demás relativas al estado civil de las personas;

7º En los juicios sobre venias supletorias a mujeres casadas;

8º En las declaraciones de pobreza;

9º En todos los demás asuntos en que el ministerio público deba ejercer funciones según lo dispongan los códigos Civil, Mercantil, o leyes especiales.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pido la palabra.

Rogaría a la Comisión que aceptara la introducción de un artículo que creo necesario figure en esta ley.

Ese artículo sería el 112, y diría: «Los agentes fiscales estarán obligados a entablar las gestiones que les fueran ordenadas por el Poder Ejecutivo.»

Voy a dar las razones que tengo para pedir la introducción de este artículo.

Se sabe que los agentes fiscales son nombrados por el Poder Ejecutivo; se sabe, por la lectura de las atribuciones que la ley señala, que, en ningún caso, debiera ser necesario que el Poder Ejecutivo tuviera que incitar a los fiscales a entablar ciertas acciones, a tener ante los tribunales cierta conducta; pero el hecho

es que ocurren casos en los cuales los fiscales demoran el cumplimiento de su deber, ya se trate de asuntos de interés público, que afectan a todo el pueblo de una manera directa y evidente, ya sea que se trate de asuntos que afecten solamente al Fisco.

El Poder Ejecutivo ordena a los fiscales que entablen ciertas acciones, y los fiscales, u obedecen o reclaman de esta orden, insinuando que queda a su arbitrio el hacer o no la gestión.

Estoy muy lejos de creer que un agente letrado debe obedecer ciegamente ciertas órdenes, defender ante los tribunales lo que su conciencia le dice que no debe defender, pero estos serían los casos menos numerosos.

Los agentes fiscales son en cierto modo encargados del Poder Ejecutivo para ejercer determinadas funciones, y deducir acciones, como representantes de este poder, ante los tribunales. Otras veces asumen, por su modo de ser sui géneris, la representación del pueblo, para gestionar ante los tribunales los intereses de este mismo pueblo, que se encuentran lesionados en tal o cual forma, ya sea por la perpetración de un crimen o de otra manera.

Bien; el Poder Ejecutivo nombra los agentes fiscales y puede removerlos si no obedecen las indicaciones de él; pero es odioso tener que remover un agente fiscal, porque no haga lo que el Poder Ejecutivo le ordena.

Lo que quedaría simplemente para ser discutido, es esto: si el Poder Ejecutivo puede ordenar a los agentes fiscales que observen tal o cual conducta en presencia de ciertos hechos o que entablen tales y cuales acciones.

Para mí no hay la menor duda. El solo nombre de agentes fiscales, el origen que han tenido en todas las épocas, el propósito a que responde el hecho de ser nombrados por el Poder Ejecutivo, todo esto induce a creer que el Poder Ejecutivo tiene en realidad facultad para ordenar a los agentes fiscales que procedan de tal o cual manera.

Ya ha habido algunos casos en que los agentes fiscales, quizá desconociendo las facultades del Poder Ejecutivo, si no se han negado de un modo terminante a deducir las acciones que el Poder Ejecutivo ha querido que deduzcan, al menos no las han verificado con la prontitud, con el celo que era necesario: han puesto obstáculos, y entonces el Poder Ejecutivo ha debido suspenderlos o removerlos, nombrando otros agentes fiscales que estuvieran de acuerdo con sus propósitos o sus ideas.

Pienso, pues, que estableciendo en la ley un artículo como el que acabo de indicar, todas estas dificultades quedarían removidas y no

tendríamos en adelante que lamentar contradicciones.

Es cierto, señor, que los tribunales están obligados a velar por el orden público, por la disminución de los crímenes, etcétera, que los encargados de hacer patentes estos desórdenes ante la autoridad competente son los agentes fiscales; pero también es cierto que no siempre cumplen con su deber ni juegan en su esfera propia, y entonces el Poder Ejecutivo, que es el agente vivo, diré, del poder, y sobre el cual recaen, aun cuando sea injustamente, muchas veces todas las inculpaciones, queda obligado a incitar a los agentes fiscales para que promuevan ciertas acciones y está facultado para ordenar que las promuevan, porque una incitación puede ser contestada con una negativa. Si no tiene facultad de ordenar, la incitación sería completamente inútil.

Quería saber la opinión de la Comisión respecto a esta adición que propongo.

Sr. Febre. — Pido la palabra.

La adición que propone el señor ministro lleva el propósito de corregir un inconveniente que se le ha presentado seguramente en la práctica.

El Senado sabe que las leyes no pueden abarcar todos los casos particulares que pueden ocurrir, y menos se pueden dictar para casos pura y exclusivamente especiales: estas deben tener un carácter general.

Deseando corregir este mal, dice el señor ministro que el Poder Ejecutivo requiere la facultad de incitar a los fiscales para que promuevan tal o cual gestión ordenada por el Poder Ejecutivo que no se halla con la suficiente autoridad para que estos funcionarios cumplan con su deber, unas veces porque son negligentes o abandonados, y otras porque creen que no deben llevar ante los tribunales las gestiones que el Poder Ejecutivo les indica.

Parece que el señor ministro quiere poner a los agentes fiscales completamente bajo la dependencia del Poder Ejecutivo o del ministerio, de modo que sean simples empleados que hagan lo que el Poder Ejecutivo les ordena.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — En ciertos casos.

Sr. Febre. — En ciertos casos, cuando el Poder Ejecutivo crea que debe hacerlo; por eso encuentra conveniente que se faculte al Poder Ejecutivo para incitar a los fiscales a que cumplan de lleno con sus funciones.

Pero, señor presidente, si hay fiscales que no son diligentes, activos, escrupulosos en el cumplimiento de sus deberes, ¿quién tiene la

culpa de esto? No soy yo, no es ninguno de los señores senadores; es el Poder Ejecutivo, que los nombra. Debe, pues, tener mucho cuidado de nombrar personas que llenen todas las condiciones requeridas para el puesto que van a desempeñar; que sean diligentes, activas e inteligentes, en fin, que reunan todas las condiciones que se requieran para el buen desempeño de las funciones que se les encomienda. Esto por un lado.

Ahora, el deseo del señor ministro, de imponer al fiscal, que es un abogado, que es un letrado, la obligación de someterse sin observación a la incitación del Poder Ejecutivo, para que haga forzosamente lo que el Poder Ejecutivo le mande, es una pretensión que llega a este propósito: a obligarle al abogado que acepta el puesto de fiscal a que falte a sus deberes profesionales. Antes de ser fiscal, como abogado, tiene el deber, y lo jura al recibirse de esta profesión, de desempeñar sus funciones con arreglo a las leyes de la Nación, de observar estrictamente la ley, de ser el defensor, en los casos que ocurran, de todos los derechos y de todos los deberes que la ley concede e imponga.

En el caso, pues, que tuviera que subordinar su criterio y su conciencia jurídica a la inteligencia del gobierno, tendría que faltar a este primordial deber, como digo, de defender la justicia, dado caso que se le exigiera alguna cosa que no estuviera en armonía con la justicia, según él la entiende.

Me parece, señor presidente, que la dificultad que hace presente el señor ministro, no es posible salvarla sino con la buena elección de estos funcionarios. Será muy raro que ocurriera el caso de que el fiscal no satisficiera las exigencias del Poder Ejecutivo si ellas se armonizan con la ley y con la justicia. Ahora, si no se armoniza con la ley y la justicia a juicio del fiscal, porque él tiene que desempeñar sus funciones con arreglo a su criterio, y no con arreglo al criterio del Poder Ejecutivo, entonces su deber profesional le aconseja no entablar acción ni deducirla ante los tribunales en los asuntos que le someta el Poder Ejecutivo, y este será el único caso en que el señor ministro no haya encontrado satisfechos sus deseos respecto de estos funcionarios públicos.

Me parece que queda bien el artículo así, pues respecto a lo que pretende el señor ministro, debo decirle que para hacer uso, no ha de encontrar abogados de consideración que acepten el puesto.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pido la palabra.

Si bien es cierto, como dice el honorable señor senador, que no pueden hacerse leyes para excepciones, también es cierto que las reformas hechas en la ley por medio de nuevos artículos que se introducen y que importan modificaciones fundamentales, son hijas de la experiencia.

Es claro; cuando en la aplicación de una ley se encuentra que ella no ha previsto ciertos casos, y se tropieza con un inconveniente, el tropiezo que se encuentra sirve de indicación para evitarlo cuando se trate de la reforma de la ley. Este es el caso que ahora ocurre.

La cuestión no es tan sencilla como parece; si con la mejor buena voluntad de un Poder Ejecutivo cualquiera, no el actual, cualquier otro, si con la mejor buena voluntad de un agente fiscal, no siendo clara la ley, el agente fiscal puede decir: yo no soy empleado del Poder Ejecutivo, tengo mis atribuciones marcadas por la ley, y a ellas debo sujetarme; tengo un criterio independiente, absolutamente independiente.

Y si el Poder Ejecutivo cree, por ejemplo, que yo debo acusar ante el juez federal por una estafa cometida en la aduana, y yo creo que no debo hacerlo, mi criterio prevalece, y no acuso a los defraudadores del fisco: y el Poder Ejecutivo no me puede incitar, porque no está en la ley que puede incitarme, y mucho menos ordenarme, porque no está en la ley que pueda ordenarme; soy agente independiente, procedo con criterio propio. Leo los artículos de la ley y veo que me mandan proceder:

«En todo asunto en que haya interés fiscal, a menos que la representación de esos intereses estuviese asignada a otra repartición administrativa.»

En presencia de esta prescripción, muy bien podría decir el fiscal: no creo que ha llegado el caso del inciso 1º o del 2º y no procedo.

Entonces tenemos que este agente fiscal ha substituído su criterio a la ley, a los principios y a las conveniencias sociales.

Eso es lo que yo quiero evitar.

Los agentes fiscales eran empleados del gobierno para verificar lo que el gobierno les mandaba; eran sus representantes ante los tribunales; gestionaban ante ellos los intereses del Poder Ejecutivo.

Si no se sanciona un artículo así, es necesario que al Poder Ejecutivo le den un empleado que pueda asumir su representación ante los tribunales, y a quien él le diga: «Acuse a fu-

lano de tal que ha defraudado al fisco; acuse a zutano, que ha hecho tal cosa contra el orden público.»

Si los agentes no han de obedecer las órdenes del Poder Ejecutivo, es necesario que esta ley le dé al Poder Ejecutivo un empleado que le obedezca, porque, repito, el Poder Ejecutivo necesita un representante ante los tribunales.

No puede estar librado al criterio de los agentes fiscales, y no es una regla de buena conducta tener que cambiarlos a cada rato, cuando no están conformes con las órdenes del Poder Ejecutivo; precisamente para evitar la odiosidad de esas medidas, proponía este artículo, que puede existir en las mismas condiciones que todos los demás.

Si este artículo no fuera aceptado, yo pondré a su tiempo, en el presupuesto, un sueldo para costear un agente fiscal que esté a las órdenes del Poder Ejecutivo y verifique lo que éste le mande.

Tan conveniente es lo que yo propongo en este momento, que el mismo Senado acaba de tomar una resolución que parece dictada obedeciendo a los principios que yo establezco.

Creo que el señor senador no me negará la importancia que tiene una afirmación de esta especie: cuando se invoca ante una autoridad su propia autoridad, palabras y resoluciones recientes, la invocación es todopoderosa.

El Senado acaba de dirigir una nota al Poder Ejecutivo diciendo: el señor ministro ordenará al agente fiscal que proceda a dar cumplimiento a tales y cuales resoluciones. Luego, el Senado piensa que el Poder Ejecutivo puede ordenar al agente fiscal que haga lo que le indica. No salgo, pues, de las teorías del Senado cuando propongo que se establezca en la ley un artículo en ese sentido.

He dicho.

Sr. Zapata. — Voy a hacer una pregunta al señor ministro, y su contestación determinará mi voto. ¿El caso que el señor ministro supone es aquel en que creyendo el Poder Ejecutivo que debe iniciarse tal acción civil o criminal y el fiscal diga: no creo que deba iniciarse?

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Sí, señor.

Sr. Zapata. — Si es así, creo que la dificultad está salvada con la facultad que tiene el Poder Ejecutivo de nombrar un fiscal ad hoc.

Sucede continuamente que el fiscal, por implicancia, por enfermedad o por cualquier motivo, no puede entablar una acción que es necesaria, que es indispensable iniciar, y es el caso en que el juez de oficio nombre un fiscal ad hoc. No veo por qué, en el caso a que se

refiere el señor ministro, no pueda nombrarse un fiscal ad hoc.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Porque produce fuertes erogaciones, porque no hay fondos especiales para eso, y sobre todo porque la sola negativa del encargado especial, y la obligación de nombrar un fiscal ad hoc, ya invalida la causa y levanta un argumento en contra del Poder Ejecutivo. Es una especie de veto que el fiscal interpone al derecho del Poder Ejecutivo. Si se tiene que nombrar un fiscal ad hoc por la negativa del empleado oficial, del fiscal permanente, ya la causa va con este antecedente: que un abogado, agente del Poder Ejecutivo, declara que no tiene razón.

Sr. Febre. — Pido la palabra.

Muy raro me parece que será el caso propuesto por el señor ministro de que en una causa de contrabando, por ejemplo, el Poder Ejecutivo incite al fiscal para que cumpla con su deber, deduciendo las acciones que correspondan, y el fiscal se niegue a desempeñar sus funciones.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Sería raro en los tiempos normales, pero no lo es en los tiempos anormales, cuando las luchas políticas se encienden y los hombres se dividen en bandos y sirven a sus partidos. Entonces no es raro ver todos esos conflictos; y basta que sea posible una cosa para que la ley la tome en cuenta.

Sr. Febre. — Tiene razón el señor ministro: puede ocurrir el caso en que estén en disidencia el Poder Ejecutivo y su fiscal, es decir, que el fiscal no crea que haya mérito para deducir acciones ante los tribunales y el Poder Ejecutivo crea que sí. Pero para estos casos, que pueden ser muy raros, no debe hacerse una erogación constante, permanente, manteniéndose un agente fiscal para cuando el agente titular se niegue a cumplir con su deber.

Si bien es cierto que estos casos pueden ocurrir en situaciones anormales, es cierto también que las leyes se dan para los casos anormales. En las situaciones anormales se presentan siempre inconvenientes que no pueden ser previstos por la ley que se da para las situaciones ordinarias. Con todo, en esas situaciones extraordinarias el Poder Ejecutivo tiene recursos sobrados para llevar adelante sus propósitos en cumplimiento de sus deberes públicos. Para eso tiene partidas para eventuales el Ministerio de Hacienda, el de Justicia y todos los demás, para nombrar empleados ad hoc; y un fiscal ad hoc, si cree que hay mérito para deducir acción ante los tribunales, lo

hará sea cual fuere el asunto de que se trate, y lo hará con éxito, no obstante la negativa del otro fiscal, porque, si bien es cierto que ya lleva medio desautorizadas sus funciones con esa negativa, es cierto también que las lleva robustecidas por las opiniones del Poder Ejecutivo, y entonces no estaría inhabilitado para desempeñar perfectamente los deberes que aceptó en ese caso especial.

No veo, pues, dificultad en que el artículo quede tal como está: el Poder Ejecutivo tiene sobrados medios para llevar adelante el cumplimiento de sus deberes públicos, nombrando, en los casos especiales que indica el señor ministro, un fiscal ad hoc, que es lo más práctico.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Haré otra observación.

Esta cuestión ha sido debatida por la prensa y en documentos oficiales, y por personas del foro empleadas en la Cámara de lo Civil y de lo Criminal, que han dado su opinión: unos creyendo que el Poder Ejecutivo tiene facultad de ordenar al fiscal que deduzca ciertas acciones, y otros creyendo lo contrario. La ley vendría a resolver ese punto de doctrina.

No me parece tan insignificante por lo que hace a las facultades del Poder Ejecutivo. Ya sé el remedio: si el fiscal no obedece, se le destituye y se nombra otro. Es un medio quirúrgico, pero es odioso. Mejor es, desde que no hay razón para que sea este artículo excluido de la ley, que figure en ella, y yo digo que el Senado piensa como el Poder Ejecutivo, puesto que le ha pedido que ordene al fiscal que deduzca una acción ante los tribunales.

Debe decirse, pues, en la ley: «El Poder Ejecutivo «podrá ordenar» al fiscal», para evitar la posibilidad de las veleidades de algún agente fiscal que crea demasiado en su independencia.

Desde el más alto al más ínfimo de los empleados, ninguno tiene una independencia completa.

Sr. Ortiz. — Voy a decir algunas palabras como miembro de la Comisión.

Yo estoy de acuerdo con mi honorable colega por Entre Ríos para que no se introduzca ninguna modificación en este artículo. Creo que los agentes fiscales, por el solo hecho de exigirse para el desempeño de ese puesto un título profesional, no pueden ser puestos bajo las órdenes absolutas del Poder Ejecutivo, porque eso sería lo mismo que establecer que el gobierno indicara a los médicos cómo han de curar y al Departamento de Ingenieros cómo ha de hacer las obras públicas.

Sr. Cello. — Es una doble facultad la que tiene el fiscal, pues participa de la doble naturaleza de empleado civil o judicial y de empleado que ayuda al poder administrador en sus funciones. No es un empleado que tiene solamente por objeto el deber de hacer cumplir la ley, cuando se trata de un crimen o de un delito grave de cualquier naturaleza, que hiera a la sociedad, debe también coadyuvar a la marcha administrativa siempre que el Poder Ejecutivo necesite sus servicios.

Sr. Ortiz. — Perfectamente, pero con arreglo a su criterio propio. Así le dice al médico: cure, pero no le dice cómo ha de curar, y al Departamento de Ingenieros: haga un ferrocarril, pero no le traza la línea, ni le indica los puntos por dónde ha de pasar.

Sr. Cello. — Perfectamente, pero el Departamento de Ingenieros no dice: no quiero hacer los estudios, ni el médico dice: no quiero curar, sino: no puedo curar.

Sr. Ortiz. — El agente fiscal está en su derecho de decir: esta acción es injusta; yo no puedo deducirla con arreglo a derecho.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Voy a citar el caso que me ha obligado a proponer este artículo, y que no había citado antes porque creía que fuera conocido de la Cámara.

La prensa ha denunciado demoras increíbles en la administración de justicia en materia criminal; ha dicho por todos sus órganos que hay en la penitenciaría individuos privados de su libertad y a quienes no solamente no se les ha tomado declaración, sino que están allí contra las leyes, contra la Constitución y contra los principios, porque ningún individuo puede estar en la cárcel más que un tiempo determinado sin que se le haga saber la causa de su prisión. En vista de esta denuncia, el ministerio pasó una nota al agente fiscal preguntándole qué había sobre eso, y el agente fiscal contestó: No; el Poder Ejecutivo no puede ordenarme a mí nada, ni incitarme a hacer gestiones de ninguna especie, y no tengo obligación de contestar.

Es evidente que el Poder Ejecutivo habría podido decir: cese en sus funciones el fiscal aludido; pero el fiscal aludido era un abogado, y prevengo que una buena parte de los abogados estaban de acuerdo con el ministro; entre éstos — los que estuvieron en contra no necesito recordar — figura el señor Gorostiaga, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Ya se ve que, cuando menos, la cuestión era discutible. Por lo tanto, he querido evitar la

posibilidad de la discusión introduciendo este artículo.

El caso no puede ser más claro, es evidente. El Poder Ejecutivo es la única forma visible de soberanía para el extranjero; es el único poder que se mueve; contra él van todos los reclamos; es el aparente responsable ante los extranjeros, de todas las anomalías en nuestra vida judicial; sobre él recaen las responsabilidades; a él se dirigen todos, y tanto, que los extranjeros que escriben esos periódicos no piensan que puedan proceder de otro modo; marcan el párrafo y lo envían al ministro para que vea, creyendo, naturalmente, que alguna influencia ha de tener el ministro de justicia para mover estos asuntos en bien, en interés general. Si un fiscal puede contestar que el ministro de justicia no tiene derecho de dirigirse a él para incitar u ordenarle nada, ¿a dónde vamos a parar?

¿Qué será, qué intervención tendrá el ministro de justicia? Ninguna.

He reconocido la necesidad del artículo y por eso lo propongo...

Sr. Ortiz. — Pero fíjese el señor ministro que está perfectamente establecida la obligación del fiscal con el artículo que dice que él debe intervenir en todo asunto en que haya interés fiscal, etcétera.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pero dirá el fiscal: sí, señor; pero eso depende de mi criterio, y el Poder Ejecutivo no tiene derecho de incitarme a que cumpla, porque no está en ninguna parte de la ley que el Poder Ejecutivo tenga derecho de incitarme. Fíjese en eso el señor senador.

Sr. Cello. — Pido la palabra.

No estoy conforme, señor presidente, con el artículo que quiere introducir el señor ministro en la forma que lo propone; pero creo que, modificándolo, sería quizá aceptable, porque él vendría a salvar los errores y dificultades de que ha hecho mérito el señor ministro.

Yo decía antes que los agentes fiscales tenían un doble carácter, dobles funciones.

En primer lugar, cuando desempeña las funciones que le impone su empleo ante los jueces procediendo de oficio, en cuyo caso no depende de nadie, depende de la ley, y esto está ya sancionado por el Senado.

El inciso 1º del artículo 110 dice: «Corresponde especialmente a los agentes fiscales, etcétera, promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos que se cometieren en la jurisdicción de la Capital y que llegaren a su conocimiento por cualquier medio.» De mane-

ra que siempre que se cometa un delito y llegue a conocimiento del fiscal, ya sea por la prensa, ya por una nota del Poder Ejecutivo, o por el aviso de dos o más personas caracterizadas, como lo suponen las antiguas leyes y lo suponen aun las modernas en esta materia, el agente fiscal está obligado a proceder a la averiguación inmediata del delito cometido.

Pero parece que el señor ministro, al proponer este artículo como remedio a un mal grave que se nota en la práctica, no trata de estos casos en que se ha cometido un delito y el fiscal no ha querido proceder a su averiguación, como está obligado a hacerlo por el inciso 1º del artículo 110, sino de los casos en que el fiscal se rehúsa a activar por indicación del Poder Ejecutivo causas criminales pendientes, iniciadas ya, que se refieren a otros tantos reos que se encuentran detenidos en la penitenciaría o en cualquier otra cárcel. Y es claro, a mi juicio; el agente fiscal en este caso ha hecho bien desconociendo la facultad del Poder Ejecutivo al ordenarle que proceda a activar la tramitación de causas pendientes desde tal o cual fecha, porque cuando desempeña funciones ante la cámara, si es el fiscal de cámara, o ante el juez de primera instancia si se trata de una causa que está en primera instancia, tanto la Cámara como el juez tienen facultades disciplinarias y correccionales para incitarlo al cumplimiento de su deber.

Según lo establece la misma ley, la Cámara de Justicia está obligada a hacer, mensual o trimestralmente una visita de cárceles. Esta tiene por objeto que cuando note retardo en las causas, vea dónde está el mal, de dónde parte, y en virtud de las facultades que le confiere la ley, mande al fiscal que acuse al reo, al defensor general que lo defienda, si está en estado de defensa, y al juez que tome las declaraciones, si hay que tomarlas, etcétera.

Es, pues, la Cámara de Apelaciones o el juez los que tienen, en virtud de sus facultades disciplinarias y correccionales, el derecho de mandar activar la tramitación de las causas.

El Poder Ejecutivo le dice al agente fiscal: hay el reo tal, que tiene su causa en tal estado, desde tal fecha, y como nadie puede ser preso indefinidamente, averigüe el retardo de esta causa. En este caso, ¿quién manda al agente fiscal? ¿el ministro, el jefe del Poder Ejecutivo o la Cámara de Apelaciones? La Cámara, dice la ley; el Poder Ejecutivo no, porque en este caso, tomando por este lado las facultades del agente fiscal, está bajo la inmediata inspección y vigilancia de la Cámara de Ape-

laciones, sin que esto quiera decir que no tenga, en los casos en que ejerce sus facultades administrativas, una dependencia inmediata y necesaria con el Poder Ejecutivo también.

Si que nadie pueda negar que en este caso el Poder Ejecutivo pueda mandarlo, ordenarlo, si hay un caso de contrabando, si un individuo burlando la vigilancia aduanera quiere introducir nercaderías y se constata el delito, ¿qué agente fiscal, qué hombre habría que fuera capaz de resistir, no digo la insinuación del Poder Ejecutivo, sino simple noticia de un diario que dijera que fulano de tal ha defraudado al fisco en tantos miles de pesos?

¿Se puede creer que el espíritu de partido pueda llevar a un funcionario de esa clase a desatender un aviso de esta naturaleza?

Hace poco tiempo que por la denuncia de la prensa se ha entablado una causa en Concordia que, por la importancia que se le da, está destinada a llamar la atención y en la que no ha intervenido el Poder Ejecutivo: ha sido una simple denuncia de la prensa.

¿Qué sería, pues, en la Capital — estamos tratando de los agentes fiscales de la Capital — una causa de mayor magnitud, aquí donde, como sería mayor la lesión hecha, sería mayor el interés que despertaría?

No podría en este caso...

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — ¿Me permite una observación?

¿Qué habría dicho el Senado si, contestando a la nota que hace pocos días envió al Ministerio de Justicia, el ministro hubiera dicho: Honorable Senado: el señor agente fiscal piensa que no le corresponde acusar a quien el Honorable Senado manda acusar, y como el criterio de los agentes fiscales es superior a todos, al criterio de los miembros del gobierno y demás, no tengo nada que hacer: no quiere acusar el fiscal?

¿Qué diría el señor senador si el gobernador de la penitenciaría, dirigiéndose al ministerio, le dijera: aquí, en esta cárcel que el Poder Ejecutivo sostiene, dando tantas y cuantas razones que pesan sobre el tesoro público, hay cincuenta individuos que han sido mandados, así nomás, mandados; nadie se ha presentado a pedirles declaración; no se sabe si son o no criminales; ellos mismos hacen la representación de que no conocen la causa de su prisión?

¿Procedería bien el Poder Ejecutivo si contestara esto: déjelos no más que coman, para eso vota el Congreso el presupuesto, y esto está bajo la jurisdicción de la Cámara en lo civil;

espere que vaya la visita del trimestre, y los miembros de la Cámara dirían lo que se debe hacer?

¿Cruzarse de brazos?; yo creo que no es esa la misión del Poder Ejecutivo.

Sr. Ortiz. — Respecto de las facultades, el Poder Ejecutivo tiene la principal, cual es la de destituirlos si no cumplen con su deber.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pero, precisamente, señor senador, es lo que yo no quiero.

Sr. Ortiz. — Pero los casos que cita el señor ministro sólo pueden producirse con fiscales enteramente arbitrarios e incapaces.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Son casos que suceden todos los días. Este mismo que acabo de citar está a punto de producirse, quizás por cuestión de controversia, sin mala voluntad de parte del fiscal ni de parte de nadie.

Si el fiscal hubiera dicho: creo que no debo acusar y que la Cámara no tiene facultad para ello, ¿qué le habría dicho al Senado?; ¿cuál hubiera sido mi situación?

Me llama mucho la atención que asuste tanto este artículo, desde que el mismo Senado reconoce que el Poder Ejecutivo tiene facultad de ordenar. Ordene, dice la nota del Senado; y entonces, ¿por qué no lo establece en la ley que está votando el mismo Senado?

Sr. Febre. — Basta con estimular.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Estimular... ¿Y si no se deja estimular? Será necesario mandarle, pues. El poder de estimular no es propiamente una facultad.

Sr. Juárez Celman. — ¿Cuál es el artículo que se discute?

Sr. Presidente. — Es una adición, que propone el señor ministro, después de las atribuciones del fiscal.

Sr. Juárez Celman. — Me llama mucho la atención, porque todos los empleados, aun los del Poder Judicial, son personalmente responsables de los actos que ejerzan contrariando las leyes.

Por consiguiente, aquí se le quita toda independencia al fiscal, y podría suceder esto: que el Poder Ejecutivo, por ejemplo, mandara acusar; y el fiscal estará obligado, en virtud de este artículo, a hacer tal vez una acusación contra expreso derecho, y la cámara lo suspenderá, lo que no puede ser.

Sr. Febre. — Si sabe cumplir con su deber, eso no sucederá.

Sr. Juárez Celman. — Yo creo que un fiscal

no puede decir jamás: «no acuso porque no quiero acusar»; puede decir: «no acuso, porque no hay ley que autorice semejante acusación».

Voy a citar un ejemplo.

Al fiscal doctor Zavaglia se le mandó entablar una causa contra sus amigos políticos, y él renunció su puesto, procediendo honorablemente, para que otro lo hiciera. No dijo: no hay derecho; pero pudo tener otra razón que no fuera la de proceder contra expreso derecho.

¿Cómo va a producir el fiscal?

Se le quita toda independencia, y no comprendo cómo un hombre puede ejercitar acciones contra lo que él mismo cree.

Sr. Ortiz. — El fiscal no es un soldado de línea para obedecer ciegamente.

Sr. Juárez Celman. — Me parece que basta con lo que establece el artículo 1º para los objetos que propone el señor ministro: «los fiscales tienen obligación de continuar ante las Cámaras la intervención que el ministerio público hubiese tenido ante los jueces inferiores.»

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pero, ¿quién se las hace cumplir?

Sr. Juárez Celman. — El Poder Ejecutivo y la Cámara.

Sr. Cello. — El señor ministro ha hecho mérito, para fundar la conveniencia del artículo que está en discusión, de una nota que dice ha pasado el Honorable Senado al Poder Ejecutivo nacional, pidiéndole que ordene a un fiscal, que aún no está regido por esta ley, que acuse; y pregunta el señor ministro qué habría dicho el Honorable Senado si el fiscal hubiera dicho: no acuso. Quién sabe lo que habría dicho, no conozco el caso: puede ser que se haya mandado acusar sin derecho; puede que se le haya ordenado una cosa y que la Cámara de Justicia le haya ordenado otra: es el Poder Judicial el que interpreta las leyes en último caso, no es el Congreso.

Por lo que respecta a los quince, veinte o mil presos que hay en la penitenciaría, cuyo gobernador no sabe siquiera por orden de quién han entrado, esto es irregular y no sucede en la cárcel de la última aldea de provincia.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Es una suposición.

Sr. Cello. — Entonces, si es una suposición, es supuesto el mal que se quiere salvar con remedio que nos ofrece por este artículo.

Decía, señor presidente, que era fácil satisfacer al señor ministro admitiendo parcialmente una reforma en este sentido, decir: el Poder

Ejecutivo tendrá la facultad de ordenar a los fiscales en las cuestiones administrativas.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Perfectamente.

Sr. Cello. — Entonces, no hay peligro, desde que el mismo Poder Ejecutivo no administra sino de acuerdo con las leyes que le dicta el Congreso, y entre el criterio legal del Poder Ejecutivo y el criterio legal del fiscal, creo que no puede haber grandes disidencias.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Aceptaría el artículo en esa forma.

Sr. Cello. — Por otra parte, nadie ha negado la dependencia que existe entre el fiscal y el Poder Ejecutivo. Si el Poder Ejecutivo manda y el agente fiscal no le obedece, lo destituye. Si dice: esta es mi voluntad, esto no puede hacerse, ¿pero entonces la desobediencia del fiscal es un título para asegurar mejor su empleo?

Si el agente fiscal es una rémora para la marcha de la administración, se le destituye. Nadie criticaría al Poder Ejecutivo porque echó a un empleado que en vez de ser útil, que en vez de corresponder con su servicio a la retribución que se le paga, es un inconveniente para la administración. Supongamos que se acepta el artículo, tal como lo propone el señor ministro, el Poder Ejecutivo puede mandar, pero ¿cuál sería la sanción penal si manda y no se le obedece? Como he dicho antes: destituir al empleado, no hay otro medio.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Estando establecido en la ley lo que yo propongo, el agente fiscal no puede decir al Poder Ejecutivo que no puede ordenarle deducir una acción como ya se lo ha dicho; esa es la ventaja.

Sr. Juárez Celman. — Si se consigna en la ley, es una obligación para el agente fiscal.

Sr. Cello. — Toda ley tiene dos partes, la dispositiva, que manda, y la otra, que es la sanción penal. En este caso la sanción penal está implícita: al empleado que no obedece al Poder Ejecutivo siendo dependiente de él, se lo expulsa.

Sr. Juárez Celman. — En el primer caso hay derecho a negarse: el que se niega es porque tiene derecho: nadie se niega sin fundamento; y en el segundo caso, siendo el artículo terminante, no podría negarse.

Sr. Cello. — La dependencia existe siempre.

Sr. Juárez Celman. — Pero no está dicho en ninguna parte.

Sr. Cello. — El inciso 1º del artículo 110 dice: «Promover la averiguación y enjuiciamiento de los delitos que se cometieren en la jurisdicción de la Capital y que llegasen a su conocimiento «por cualquier medio». Ya ve si lo dice. Para que no haya violencia, podría reformarse el artículo de esta manera: «El Poder Ejecutivo podrá ordenar en lo administrativo a los fiscales que entablen las acciones que crea convenientes». Así me parece admisible, y no creo que se ataquen las facultades disciplinarias...

Sr. Juárez Celman. — Esas facultades las tiene el Poder Ejecutivo y las ejerce todos los días.

Sr. Cello. — Entonces, ¿para qué se quiere que lo diga la ley?

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Para que las ejerce sin contradicción, para que en cada caso no se produzca una discusión entre todos los abogados y jueces de la Capital y de la República.

Para que no se crea que el Poder Ejecutivo ataca la independencia del fiscal cuando le diga: deduzca usted tal acción a que haya lugar en tal caso, lo cual no importa decir que el fiscal no puede contestarle al Poder Ejecutivo: «Señor, yo creo que no hay acción que deducir». Pero que no se le niegue al Poder Ejecutivo la facultad de dirigirse al fiscal y ordenarle que ejerce ciertas acciones. Eso debe establecerse terminantemente en la ley porque tal cual está la ley, que parece ser muy terminante, no lo es. Es decir, el fiscal promoverá la acción cuando lo sepa pero el fiscal puede decir que no lo ha sabido. Está en los periódicos, no lo he leído, se le ha dirigido una carta, no la he abierto, puede decir el agente fiscal. Es necesario, pues, que quede establecido en la ley que el Poder Ejecutivo puede incitarle, ordenarle, que promueva la acción que haya lugar, de acuerdo con las teorías del Honorable Senado, que ha pocos días ha pedido al Poder Ejecutivo ordene al agente fiscal entable una acción dada.

Sr. Febre. — Pido la palabra.

4

Sr. Presidente. — Propongo a la Cámara pasar a un cuarto intermedio.

—Se pasa a cuarto intermedio, continuando la sesión pocos momentos después.

Sr. Presidente. — El señor ministro pide que se vote el artículo.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — No, señor; lo propuse a la aceptación de la Comisión, pero como ésta no lo ha aceptado, respeto las razones que tenga para no admitirlo.

Sr. Presidente. — Entonces, continuaremos.

—Se lee:

Artículo 113. — Corresponde al fiscal de las cámaras:

- 1º Continuar ante ellas la intervención que el ministerio público hubiese tenido ante los jueces inferiores;
- 2º Intervenir en los asuntos que se promovieren relativos a la superintendencia de las cámaras;
- 3º Promover la aplicación de penas disciplinarias contra los jueces inferiores y demás empleados subalternos de la administración de justicia;
- 4º Intervenir en los recursos de fuerza;
- 5º Cuidar que los agentes fiscales promuevan las gestiones que les correspondan;
- 6º Asistir a los acuerdos de las cámaras cuando fuesen invitados.

CAPÍTULO IV

Disposiciones generales

Art. 114. — Para ser fiscal de las cámaras se requieren las mismas condiciones que para vocal de éstas y para agente fiscal, las de juez de 1ª instancia con sólo dos años de ejercicio en el país de la profesión de abogado.

—Se aprueban sin observación los artículos 113 y 114.

—Se lee:

Artículo 115. — Los miembros del ministerio público no podrán abogar ni ejercer representación de terceros en juicio, pero podrán hacerlo en sus propios asuntos o en los de sus esposas, padres e hijos.

Sr. Cello. — Deseo pedir a la Comisión permita una pequeña reforma a este artículo; tal como está concebido quizás se preste a que pueda hacerse extensión de esta facultad de los

agentes fiscales a asuntos que no habiendo sido originariamente propios de ellos, de sus esposas, padres o hijos que tienen facultad de defender, pudieran por medio de una cesión hacerlos aparecer como tales en el momento del litigio. La ley del 14 de Septiembre del año 63 establecía disposiciones sobre esta materia y la Suprema Corte se ha visto en la necesidad de resolver este caso cuando se trataba del fuero federal, porque éste sólo nace en favor de los extranjeros cuando la cosa que se litiga ha sido originariamente suya y no la ha obtenido por cesión o compra. Si aquella ley tenía establecida esta excepción a fin de que los agentes fiscales pudieran defender sus bienes propios y los de su esposa, padres e hijos, podrá agregarse aquí para evitar los males que trató de evitar la Suprema Corte con la resolución que he referido: «con tal que no haya habido cesión». Propongo esto a la Cámara para evitar que los asuntos que no son propios de las esposas, padres o hijos de los fiscales, se hagan propios por medio de una cesión a objeto sólo de que los agentes fiscales puedan seguir entendiendo en el litigio, levantándose la prohibición que tienen de defender asuntos de terceros. Prohibición que parece obedece a que los agentes fiscales no distraigan su atención del servicio público.

Sr. Febre. — La reforma que propone mi honorable colega por Santa Fe en este artículo me parece que lejos de evitar las dificultades las aumenta, porque si se quiere que la esposa, padres e hijos de los agentes fiscales, cuando sus derechos sean originarios, puedan gozar del patrocinio de ese empleado, porque la ley en ese caso le permite gestionar ese derecho, vamos a poner en una condición poco ventajosa y un poco desgraciada a los agentes fiscales, puesto que les vamos a prohibir adquirir bienes...

Sr. Cello. — Litigiosos solamente.

Sr. Febre. — Por consiguiente, si hay dolo, si hay mala fe, ya sabe el señor senador que eso no favorece a nadie; por lo tanto, no entra en las prescripciones de la ley.

Sr. Cello. — He citado las resoluciones de la Suprema Corte con motivo de la ley del 14 de Septiembre del 63.

Sr. Febre. — En los casos en que estén litigándose los bienes.

Sr. Cello. — No; antes de litigarse.

Sr. Febre. — Desde que no haya inhibición, no puede privarse que los adquieran.

Sr. Cello. — No quiero hacer larga discusión; me limitaré a votar en contra del artículo. No me convence el señor senador.

—Se vota el artículo 115 y se aprueba lo mismo que los siguientes:

Artículo 116. — El fiscal de las cámaras será nombrado y removido con las mismas formalidades que los vocales de éstas.

Art. 117. — Los agentes fiscales serán nombrados y removidos por el presidente de la República.

Art. 118. — Al tomar posesión del cargo, el fiscal y agentes fiscales de lo civil prestarán juramento ante la Cámara de lo Civil y los agentes fiscales de lo criminal ante esa cámara, de desempeñar fielmente sus empleos.

Art. 119. — Los agentes fiscales deberán dar conocimiento al fiscal de cualquier irregularidad que notaren y procurarán la unidad posible en la acción del ministerio, poniéndose de acuerdo con aquel funcionario, sin perjuicio de la independencia de sus opiniones.

Art. 120. — Los agentes fiscales deberán llevar, además de los libros que exprese el reglamento de sus oficinas, un registro especial en que anotarán todos los asuntos en que aparezca indudable el interés fiscal y pasarán trimestralmente al Ministerio de Hacienda una relación de dichos asuntos y del estado en que se encuentren.

TITULO VIII

De los defensores y asesores de menores e incapaces

Art. 121. — La guarda y protección oficial de las personas e intereses de los menores e incapaces en los casos previstos por las leyes estarán a cargo de los defensores y asesores letrados que en esta ley se establecen.

Art. 122. — Los defensores tendrán las siguientes atribuciones:

- 1ª Cuidar de los menores, huérfanos o abandonados por los padres, tutores o encargados; tratar de colocarlos convenientemente, de modo que sean educados y se les dé algún oficio o profesión que les proporcione medios de vivir;
- 2ª En caso de tener bienes, tomarán las medidas necesarias para su seguridad y para que se les provea de tutores;
- 3ª Atender las quejas que se les llevasen por malos tratamientos a menores, dadas por los padres, parientes o encargados, y dar cuenta a los asesores letrados para que, en caso corresponda,

eleven la queja a los jueces o tomen por sí medidas para evitar tales hechos, sea sacando a los menores del poder en que se encuentren cuando no estén en el de los padres, para colocarlos en mejores condiciones, o procediendo como se considere más prudente;

- 4ª Imponer penas de reclusión correccional con intervención judicial en las casas destinadas al objeto a los menores que observasen mala conducta;
- 5ª Inspeccionar los establecimientos de beneficencia y caridad e imponerse del tratamiento y educación que se les den a los menores, dando cuenta a quien corresponda de los abusos o defectos que notaren;
- 6ª Hacer arreglos extrajudiciales con los padres sobre prestación de alimentos a sus hijos naturales, y con los tutores y curadores sobre las personas y derechos de los incapaces;
- 7ª Ejercer todos los demás actos que fueren del caso para la protección de los menores, como lo haría un buen padre de familia.

Art. 123. — Las disposiciones precedentes son también aplicables a la guarda y protección de las personas e intereses de los incapacitados mayores de edad, sin excluir en uno y otro caso los derechos que a los padres, hijos, parientes, tutores y curadores correspondan.

Art. 124. — Los defensores de menores pueden llamar y hacer comparecer a su despacho a cualquier persona cuando a su juicio sea necesario para el desempeño de su ministerio, para pedir explicaciones o contestar a cargos que por mal tratamiento a menores o incapaces, o por cualquiera otra causa se formularan. Pueden con el mismo objeto dirigirse a cualquier autoridad o funcionario público.

Art. 125. — Los defensores podrán proceder de oficio y extrajudicialmente en la defensa de las personas e intereses puestos bajo su guarda.

Art. 126. — Los defensores pedirán dictamen verbal o escrito y consultarán a sus asesores letrados sobre las dudas o dificultades que les ocurran en el desempeño de sus funciones.

Art. 127. — La intervención en los asuntos judiciales, en que se trate de la persona o bienes de incapaces, corresponde exclusivamente a los asesores letrados.

Art. 128. — Para ser defensor se requiere ser ciudadano argentino, mayor de cincuenta años y tener las aptitudes necesarias para desempeñar el cargo.

Art. 129. — Los defensores y asesores gozarán del sueldo que les fije la ley del presupuesto y los primeros tendrán para el desempeño de sus funciones, un escribiente y un portero que serán nombrados por los defensores.

Art. 130. — Corresponde a los asesores de menores:

- 1º Intervenir en todo asunto judicial que interese a la persona o bienes de los menores de edad, dementes y demás incapaces, y entablar en su defensa las acciones o recursos necesarios, sea directa o conjuntamente con los representantes de los incapaces;
- 2º Dar dictámenes escritos o verbales, según el caso, en aquellos asuntos en que fueren consultados por los defensores de menores.

Art. 131. — Para ser asesor de menores se requieren las mismas condiciones que para agente fiscal.

Art. 132. — Los defensores y asesores de menores serán nombrados y removidos por el presidente de la República.

TÍTULO IX

Defensores de pobres y ausentes

Art. 133. — La defensa oficial se hará en la Capital de la República por un defensor de pobres y ausentes ante la Suprema Corte y juzgados federales, por cinco defensores de pobres y ausentes ante los juzgados civil, comercial y del crimen, y por uno ante el juzgado correccional, debiendo estos últimos intervenir en los recursos que se interpongan para ante la cámara respectiva.

Art. 134. — Los deberes y atribuciones del primero serán establecidas por la Suprema Corte, y por las cámaras de apelaciones de la Capital, los que deban corresponder a los demás.

Art. 135. — Para ser nombrado defensor de pobres o ausentes se requiere ser ciudadano argentino, haber ejercido en el país durante dos años por lo menos, la profesión de abogado o haber desempeñado durante ese mismo término una magistratura.

Art. 136. — El nombramiento y remoción de estos funcionarios corresponde al Poder Ejecutivo, sin perjuicio de que la Suprema Corte o las cámaras de apelaciones, según los casos

puedan también amonestarlos, suspenderlos temporalmente o destituirlos.

Art. 137. — Gozarán del sueldo mensual que asigne el presupuesto.

TÍTULO X

Del médico de los tribunales

Art. 138. — Habrá un médico de los tribunales que dará los informes y practicará los reconocimientos que éstos necesiten y le pidan para el mejor desempeño de sus funciones. El médico será nombrado por el presidente de la República, y gozará del sueldo que le asigne la ley del presupuesto.

TÍTULO XI

Secretarios y demás empleados de las cámaras

Art. 139. — Para ser secretario de las cámaras se requiere ser abogado.

Art. 140. — Las obligaciones de los secretarios serán:

- 1º Concurrir a los acuerdos y redactarlos en el libro respectivo;
- 2º Formular los proyectos de sentencia en vista de los acuerdos;
- 3º Dar cuenta de los escritos, peticiones, oficios y demás despachos, sin demora;
- 4º Autorizar las actuaciones, providencias y sentencias que ante ellos pasen;
- 5º Custodiar los expedientes y documentos que estuvieren a su cargo, siendo directamente responsables de su pérdida o deterioro;
- 6º Llevar en buen orden los libros que prevengan las leyes y disposiciones reglamentarias;
- 7º Conservar el sello de las cámaras;
- 8º Cumplir las demás obligaciones que les impongan las leyes y reglamentos.

Art. 141. — Cada cámara tendrá dos ujieres para las notificaciones, embargos y demás diligencias y para la ejecución de las órdenes que reciban del presidente.

Art. 142. — Cada cámara tendrá además el número de escribientes que fuesen necesarios para el servicio, un ordenanza y un portero.

Art. 143. — Los secretarios, ujieres y demás empleados no podrán cobrar emolumentos a las partes por actuaciones o diligencias en los juicios, bajo pena de destitución.

Art. 144. — Las cámaras podrán separar a sus secretarios, ujieres y demás empleados, de su puesto, por razones de mejor servicio público.

TITULO XII

De los escribanos públicos

Art. 145. — Para optar al cargo de escribano público, se requiere ser ciudadano argentino, mayor de edad, haber cursado los estudios y cumplido las demás formalidades que esta ley previene.

Art. 146. — Las solicitudes para optar a dicho cargo, se presentarán al Ministerio de Justicia con los siguientes comprobantes:

- 1º Certificado en forma de haber rendido examen de estudios preparatorios, con arreglo a los programas de los colegios nacionales de la República;
- 2º Constancia de haber practicado durante tres años con un escribano secretario o de registro;
- 3º Justificación de buena conducta por medio de información sumaria, aprobada por juez competente;
- 4º Constancia de tener la edad requerida, y de ciudadanía.

Art. 147. — Los que aspiren al cargo de escribano público, al comenzar su práctica, solicitarán ante la Cámara de lo Civil se les inscriba en el libro que con tal objeto se llevará en secretaría. La solicitud serán también firmada por el escribano con quien hayan de practicar, y en caso que el aspirante cambiase de oficina deberá hacerlo saber con las mismas formalidades a la cámara para la debida anotación.

Art. 148. — El Ministerio de Justicia, en el caso del artículo 145, mandará pasar la solicitud con todos sus antecedentes a la Cámara de lo Civil, para que si ésta no encontrase observación, proceda a tomar el examen.

Art. 149. — El examen versará:

- 1º Sobre códigos Civil, Comercial y Penal;
- 2º Sobre los códigos de Procedimientos Civiles, Comerciales y Penales;
- 3º Sobre las obligaciones de los escribanos públicos.

Art. 150. — Terminado el examen, se levantará acta en el libro correspondiente, y si el examinante resultare aprobado, se le expedirá

el diploma por la cámara, que será registrado en el Ministerio de Justicia.

Art. 151. — En caso de no ser aprobado, no podrá presentarse a nuevo examen hasta después de un año.

Art. 152. — Los escribanos, antes de entrar al ejercicio de su cargo, prestarán juramento ante la Cámara de lo Civil de desempeñarlo fielmente.

Art. 153. — Los abogados que quieran optar al cargo de escribano, deberán solicitarlo en la misma forma, acreditando solamente su edad, buena conducta y ciudadanía, y en vista de estos justificativos se les expedirá el diploma correspondiente.

CAPÍTULO I

De los escribanos secretarios

Art. 154. — Los escribanos secretarios son los funcionarios encargados de actuar en los juicios ante los jueces letrados.

Art. 155. — Para desempeñar el cargo deberán tener el título de escribanos, y ser nombrados por la cámara respectiva a propuesta de los jueces.

Art. 156. — Las funciones de los escribanos secretarios, serán:

- 1ª Concurrir diariamente al despacho, y presentar al juez los escritos y documentos que les fueren entregados por los interesados;
- 2ª Autorizar las resoluciones de los jueces, las diligencias y demás actuaciones que pasen ante ellos, y darles su debido cumplimiento en la parte que les concierna;
- 3ª Organizar los expedientes a medida que se vayan formando, y cuidar de que se mantengan en buen estado;
- 4ª Redactar las actas, declaraciones y diligencias en que intervengan;
- 5ª Custodiar los expedientes y documentos que estuvieren a su cargo siendo directamente responsables por su pérdida o por mutilaciones o alteraciones que en ellos se hicieren;
- 6ª Llevar los libros de conocimientos y demás que establezcan los reglamentos;
- 7ª Dar recibo de los documentos que les entregaren los interesados, siempre que éstos lo soliciten;
- 8ª Poner cargo en los escritos con designación del día y hora en que fueren presentados por las partes;

9ª Desempeñar todas las demás funciones designadas en las leyes generales y disposiciones reglamentarias.

Art. 157. — Los secretarios gozarán del sueldo que les asigne la ley del presupuesto, sin que les sea permitido cobrar emolumentos a las partes por actuaciones o diligencias en los juicios, so pena de destitución.

Art. 158. — Es prohibido a los secretarios admitir dádivas u obsequios de parte alguna que tenga interés en los juicios que tramiten por sus oficinas, bajo pena de destitución.

—Se lee:

Artículo 159. — Las actuaciones y diligencias sólo podrán hacerse personalmente por los secretarios, bajo pena de multa de cincuenta pesos, el doble en caso de reincidencia, y suspensión temporaria si persistieren en la falta.

Sr. Juárez Celman. — ¿Y esas notificaciones quedan válidas? Porque veo que se multa al escribano, pero no se dice si quedan válidas.

Sr. Febre. — Quedan inválidas; por eso se multa al escribano.

Sr. Juárez Celman. — Parece que no; sólo se multa al escribano.

Sr. Febre. — Porque ha faltado a su deber.

Sr. Juárez Celman. — Me parece que no se desprende eso del artículo.

Sr. Ortiz. — Iba a hacer presente que en los capítulos siguientes la Comisión no ha introducido modificación. Hay simplemente dos errores de ortografía que pueden dar lugar a mala interpretación. En el artículo 196, donde dice: «para firmar escrituras públicas» debe decir: «formar». Y en el 197, donde dice: «a una minuta privada» debe decir: «a una minuta firmada».

Estos son dos errores ortográficos.

Además se han suprimido tres artículos de la ley vigente que tenían un carácter transitorio.

De manera que si la Cámara quiere ir más rápidamente, puede sancionarse por capítulos.

Sr. Juárez Celman. — Yo insistiré en mi observación anterior, porque no dice «bajo pena de nulidad»; dice: «bajo pena de multa de cincuenta pesos»; de manera que, según la ley quedan válidas las diligencias hechas en esa forma.

Sr. Secretario. — (Lee): «Los secretarios no podrán actuar...»

Sr. Juárez Celman. — Ese es otro artículo; yo me refiero al anterior.

Sr. Ortiz. — Es el artículo 148.

Creo que no hay razón para que se diga de nulidad a estas diligencias, porque se han ejecutado conforme la ley lo ordena.

Sr. Juárez Celman. — ¡Pero si no hay un funcionario público que dé fe!

Sr. Igarzábal. — Hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en que anula totalmente todo lo obrado, es decir, la parte que simples encargados o dependientes de los secretarios han hecho.

Sr. Febre. — De la simple lectura del artículo, se desprende que es nula la notificación que se hace por medio de comisionados o dependientes de los secretarios de los tribunales.

El artículo dice: «Las actuaciones y diligencias sólo podrán hacerse personalmente por los secretarios, bajo pena de multa de cincuenta pesos, el doble en caso de reincidencia, y suspensión temporaria si persistieren en la falta».

De manera que, si cualquiera otro hace las diligencias, está en contravención a la ley, y son nulas, por consiguiente.

Sr. Juárez Celman. — La pena de esa contravención parece que fuera la multa.

Sr. Febre. — Sin perjuicio de la nulidad.

Sr. Juárez Celman. — Podría decirse eso.

Sr. Febre. — Propóngalo.

Sr. Juárez Celman. — Lo propongo: bajo pena de nulidad y multa de cincuenta pesos, el doble en caso de reincidencia, etcétera.

Sr. Cello. — La nulidad sería una pena para el litigante que aprovechara de la nulidad, y la validez sería una pena para el que perjudicara.

Sr. Juárez Celman. — El objeto de establecer esta nulidad, es precisamente para que los escribanos secretarios no hagan en ningún caso esto, porque podrían correr el albur de pagar la multa o someterse a ella y no hacer la notificación personalmente; pero sabiendo que la diligencia es nula, está en el interés particular del escribano secretario, no hacerla nula.

Sr. Febre. — De la simple lectura del artículo en su primera parte, se desprende que las notificaciones hechas por los dependientes de los secretarios y no por ellos mismos, son nulas, y que la única manera de hacerlas para que surtan su efecto legal, es practicándolas el secretario personalmente.

Sr. Juárez Celman. — Me permito observar al señor senador que los precedentes son contrarios; que se multa simplemente, y que no se anula la notificación. No ha habido un caso en que se haya declarado nula la diligencia.

En las visitas de inspección que se hace a las escribanías, se aplican multas por esta omi-

sión de no haber hecho personalmente la diligencia el escribano, y después se olvida de testarla, de anularla. Son multados los escribanos, pero no se declara nula la diligencia.

Puede haber asuntos muy graves en que convenga incurrir en la multa con tal de no hacer la notificación en el punto que conviene. Imagínese una diligencia que no sea hecha el día que corresponde y que se haya puesto una fecha posterior para substituir un recurso que no surtiría; cincuenta pesos de multa sería poca cosa, con tal que se pudiera hacer la notificación más tarde o más temprano.

Por eso creo que se debe establecer de una manera precisa en la ley, que es nula la diligencia y que además el secretario será multado.

Sr. Ortiz. — Creo que sería mejor dejar a las leyes de procedimiento este detalle.

Sr. Juárez Celman. — El artículo es de procedimiento.

Sr. Ortiz. — Por eso decía: en detalle, se fijan ciertas condiciones para la validez de la notificación.

Sr. Juárez Celman. — Sería bueno que conste que la mente del Senado es que es nula la diligencia en esas condiciones.

Sr. Ortiz. — Me parece que si entramos en detalles y establecemos todos estos casos, vamos a ocuparnos de algo que es de la ley de procedimientos.

Sr. Juárez Celman. — Mientras tanto, cuando se trata de actuaciones en asuntos de parientes, no se establece pena, sino nulidad, que es más grave.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Podría redactarse así el artículo 1º: Las actuaciones y diligencias serán nulas, si no han sido hechas personalmente por el secretario.

Sr. Igarzábal. — Entonces no quedaría bien el período en que se establece la pena. Mejor sería, después de «falta», agregar: siendo nulas las actuaciones y diligencias. La repetición no importa nada, porque el período es bastante largo.

Sr. Juárez Celman. — Declarando nula la diligencia, podría ser innecesaria la pena.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pero la pena es para el escribano.

Sr. Juárez Celman. — Pero el que hace una diligencia nula, por la ley tiene su pena ya: podrá corregirlo el juez.

Sr. Igarzábal. — Pero redactado así el artículo, se entendería que además son nulas las actuaciones.

Sr. Febre. — Este artículo no ha sido introducido por la Comisión, señor presidente;

figura en la ley que está vigente. Los artículos introducidos por la Comisión son los que ha aconsejado la práctica de la ley en vigencia en su necesidad de reforma o modificación. Respecto de este artículo no ha habido ninguna dificultad, y por eso lo ha dejado como está en la ley actual.

Si el señor senador por Córdoba cree que puede aclararse más la redacción del artículo que se discute, el cual establece la nulidad para las diligencias que se hagan por oficiales dependientes del actuario, la Comisión no tiene inconveniente en aceptar otra redacción; sin embargo, creo que por la lectura de ese artículo y la discusión que ha tenido lugar aquí, se comprenderá que las notificaciones y las diligencias hechas fuera de la forma prescripta por el artículo importan la nulidad. Si a pesar de esto se quiere modificar el artículo, estableciéndolo así, se puede hacer.

Sr. Ortiz. — Yo creo que el artículo no tiene propiamente la mente que le atribuye el señor senador.

Puede ser que la notificación sea válida; eso dependerá de la ley de procedimientos, porque hay defectos substanciales que anulan los actos, y otros que los afectan, pero no los anulan. Entonces puede no ser substancial el defecto, y por lo tanto convendría mantener el artículo como está, dejando a la ley de procedimientos que establezca cuáles son los casos de nulidad y cuáles son los casos en que a pesar de haber un defecto, no es nulo, sin embargo, el acto.

Me parece que está bien el artículo tal cual está redactado.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Pido la palabra.

Entiendo que lo que discute la Cámara de Senadores, en este momento, son las reformas que la Comisión ha introducido. En todo lo que sigue del impreso que tengo en la mano, no hay reforma alguna; entonces no hay necesidad ni de discusión ni de votación.

Sr. Presidente. — Hay que votar los artículos. La Cámara resolverá si se ha de votar por títulos o si se ha de hacer una votación general.

Sr. Febre. — Se puede votar por títulos, y si algún señor senador quiere hacer observaciones puede hacerlas.

Sr. Zapata. — Se debe votar por títulos, porque este es el despacho de la Comisión, no es ley todavía.

Sr. Ministro de Justicia, Culto e Instrucción Pública. — Es ley, porque está vigente.

Sr. Zapata. — No es ley, porque la estamos considerando.

—En seguida se lee y da por sancionado lo siguiente:

Artículo 160. — Los secretarios no podrán actuar en asuntos de sus parientes dentro del cuarto grado inclusive, o en aquellos en que sus parientes dentro del mismo grado intervieren, como abogados o procuradores, bajo pena de nulidad de todo lo obrado con su intervención y del pago de todos los gastos. Esa nulidad sólo podrá pronunciarse a petición de parte, pero en ningún caso será permitido invocarla al pariente.

Art. 161. — Los secretarios están obligados a guardar absoluta reserva de todos los actos que así lo requieran.

CAPÍTULO II

De los escribanos de registro

Art. 162. — El escribano de registro es el funcionario público autorizado para dar fe conforme a las leyes, de las actas y contratos que ante él se extendieren o pasaren.

Art. 163. — Habrá tantos escribanos de registro como registros, y no podrá aumentarse el número de estos últimos actualmente existentes en la capital de la República, hasta que el acrecentamiento de la población lo requiera.

Art. 164. — Compete al Poder Ejecutivo la creación de nuevos registros, previos los informes que sean del caso, teniendo siempre en vista que haya un registro por cada diez mil habitantes en la Capital.

Art. 165. — Las escrituras y demás actos públicos, sólo podrán ser autorizados por los escribanos de registro.

Art. 166. — Los escribanos de registro al tomar posesión de su oficio, depositarán en el Banco Nacional como fianza, diez mil pesos en títulos de deuda pública, fianza que se mantendrá mientras desempeñen el cargo.

Art. 167. — Los escribanos de registro estarán obligados a extender los actos y contratos que las partes les pidieren, no siendo contrarios a las leyes, sin que puedan excusarse de esa obligación, bajo pena de responder por los daños y perjuicios que causaren.

Art. 168. — Los escribanos de registro no podrán ser separados de su oficio mientras dure su buena conducta.

Art. 169. — No podrán residir fuera del territorio de la Capital, ni ausentarse sin permiso previo de la Cámara de lo Civil.

Art. 170. — Sólo podrán desempeñar el cargo de escribanos de registro, los que tengan diploma de escribanos públicos.

Art. 171. — En caso de enfermedad, ausencia u otro impedimento transitorio, podrá el escribano de registro proponer a la Cámara de lo Civil un suplente que actuará bajo la responsabilidad del proponente.

Art. 172. — Los escribanos de registro serán nombrados y removidos por el presidente de la República, previo informe de las cámaras de lo Civil o Comercial, según corresponda sobre sus aptitudes y conducta.

Art. 173. — Cada escribano de registro podrá tener un escribano adscripto a su oficina, y será nombrado en la misma forma y condiciones que los titulares, y funcionará con la responsabilidad conjunta del jefe de la oficina.

CAPÍTULO III

Disposiciones comunes

Art. 174. — No pueden ser escribanos:

- 1º Los encausados por cualquier delito, mientras dure el proceso;
- 2º Los que hayan sufrido condena dentro o fuera del país por cualquier clase de delito;
- 3º Los concursados o fallidos no rehabilitados.

Art. 175. — No pueden ausentarse sino con autorización de los jueces, en cuanto a los secretarios, y con la de la Cámara de lo Civil, los de registro.

Art. 176. — Es prohibido tanto a los escribanos secretarios como de registro, ejercer por sí o por medio de otras personas, el comercio, ni formar parte de asociaciones comerciales o de sus directorios, cuando estuviesen establecidos en la Capital, pero pueden tener acciones en sociedades anónimas.

Art. 177. — Es igualmente prohibido bajo pena de destitución, formar sociedad entre los escribanos secretarios con los de registro para el desempeño de su profesión, y repartirse los emolumentos que les correspondieren.

Art. 178. — Los escribanos de registro deberán sujetarse estrictamente en el cobro de sus derechos, a lo que prescriba el arancel que se dictare; y estarán obligados a hacer constar en

los testimonios y demás actos que expidan o en que intervengan, lo que perciban por derechos, bajo pena de cincuenta pesos de multa por cada omisión en la constancia o por cobro indebido, pudiendo en caso de reincidencia, ser suspendidos o destituidos; según la gravedad de los hechos.

Art. 179. — Deberán asimismo tener en sus oficinas, en lugar visible, un ejemplar del arancel de sus derechos.

TITULO XIII

Del registro de escrituras

Art. 180. — Las escrituras deben ser extendidas por el escribano en el registro.

Art. 181. — El escribano formará el registro con la colección ordenada de las escrituras matrices autorizadas durante el año, haciendo uno o más tomos foliados.

Art. 182. — Las escrituras se extenderán en cuadernos de papel del sello correspondiente, de cinco pliegos cada uno.

Art. 183. — Estos cuadernos serán de papel con sello y timbre especial para los registros. Antes de usar de ellos, los escribanos harán sellar cada foja por el secretario de la Cámara de Apelaciones respectiva, con el sello del tribunal.

Art. 184. — Cada registro comprenderá las escrituras matrices de un año contando desde el 1º de Enero al 31 de Diciembre inclusive.

Art. 185. — Todas las escrituras matrices llevarán el número que les corresponda, escrito en letras por orden de fechas.

Art. 186. — Las fojas del registro serán foliadas, expresándose en letras y en guarismos el número de orden que les corresponda.

Art. 187. — A la izquierda de cada llana de papel se dejará un margen por lo menos de la tercera parte.

Art. 188. — Los escribanos conservarán en carpetadas las escrituras matrices, hasta que se encuaderne el registro.

Art. 189. — Cada registro y cada tomo del registro, llevará un índice que expresará respecto de cada instrumento, el nombre de los otorgantes, la fecha del otorgamiento, el objeto del acto o contrato y el folio del registro.

Art. 190. — Los escribanos de registro tendrán un sello con que designarán todos los actos que otorguen o certifiquen como oficiales públicos. El sello deberá ser registrado en la secretaría de la Cámara de lo Civil en libro que se llevará al efecto. Este sello expresará el

nombre y profesión del funcionario, y no podrá variarse sino con conocimiento de la Cámara y por motivos que ésta encuentre suficientes.

Art. 191. — Mensualmente los escribanos de registro pasarán al presidente de la Cámara de Apelaciones respectiva, una relación de las escrituras otorgadas durante el mes, expresando el nombre de las partes, de los testigos instrumentales y de conocimiento, el objeto del acto o contrato y la fecha del otorgamiento, las que serán archivadas en orden por la secretaría de la cámara.

Art. 192. — Los escribanos de registro son responsables de la integridad y conservación de los registros.

Art. 193. — Los registros no podrán ser extraídos de la oficina sino en caso de fuerza mayor, o para su traslación al archivo general. Las escrituras matrices sólo podrán ser desglosadas del registro por orden de juez competente, cuando se trate de la comprobación de un delito, dejando el correspondiente testimonio.

Art. 194. — Los registros deben conservarse en reserva, sin que sea permitido consentir que persona alguna se imponga de ellos; pero los interesados en una o más escrituras, sus representantes o sucesores, podrán imponerse de su contenido en presencia del escribano. También podrá inspeccionarse una o más escrituras con orden del juez competente a objeto de cotejos, reconocimientos caligráficos, confrontación de firmas u otros análogos.

Art. 195. — La disposición del artículo precedente no será aplicable a los testamentos y escrituras de reconocimiento de hijos naturales, que mientras vivan los otorgantes sólo a ellos podrán ser enseñados.

Art. 196. — Sólo se usará para las escrituras y testimonios tinta negra sin ingredientes que puedan corroer el papel, atenuar, borrar o hacer que desaparezca lo escrito.

Art. 197. — No podrán ser testigos en las escrituras públicas los menores de edad no emancipados, los dementes, los ciegos, los que no tengan domicilio o residencia en el lugar, las mujeres, los que no sepan firmar su nombre, los dependientes del oficial público y los dependientes de otras oficinas que estén autorizados para formar escrituras públicas; los parientes del oficial público dentro del cuarto grado, los comerciantes fallidos no rehabilitados, los religiosos y los que por sentencia estén privados de ser testigos en los instrumentos públicos.

Art. 198. — Las escrituras deben hacerse en idioma nacional. Si las partes no lo habla-

ren, la escritura debe hacerse en entera conformidad a una minuta firmada por las mismas partes en presencia del escribano que dará fe del acto y del reconocimiento de las firmas, si no la hubiesen firmado en su presencia, traducida por traductor público, y si no lo hubiere, por el que el juez nombrase. La minuta y su traducción deben quedar protocolizadas.

Art. 199. — Si alguna de las partes o ambas fueren sordomudos o mudos que sepan escribir, la escritura debe hacerse en conformidad a una minuta que den los interesados, firmada por ellos y reconocida la firma ante el escribano que dará fe del hecho. Esta minuta debe también quedar protocolizada.

Art. 200. — La escritura pública debe expresar la naturaleza del acto, su objeto, los nombres y apellidos de las personas que la otorgasen, si son mayores de edad, su estado de familia, su domicilio o vecindad, el lugar, día, mes y año en que fuese firmada, que puede serlo cualquier día, aunque sea domingo o feriado, o de fiesta religiosa. El escribano debe dar fe de conocer a los otorgantes y concluida la escritura debe leerla a las partes, salvando al final de ella lo que se haya escrito entre renglones y las testaduras que se hubiesen hecho. Si alguna de las partes no sabe firmar, debe hacerlo a su nombre otra persona que no sea de los testigos del instrumento. La escritura hecha así con todas las condiciones, cláusulas, plazos, las cantidades que se entreguen en presencia del escribano, designadas en letras y no en números, debe ser firmada por los interesados en presencia de dos testigos, cuyos nombres constarán en el cuerpo del acto y autorizada al final por el escribano.

Art. 201. — Los escribanos deben cuidar estrictamente de salvar al fin de cada escritura las testaduras, interlineaciones, raspaduras, errores y omisiones en que hubiesen incurrido en el cuerpo de ella, en presencia de las partes y testigos que deban subscribir el acto, bajo pena de responder por los daños y perjuicios que pudieran originarse si por tal omisión se anulase la escritura.

Art. 202. — El otorgamiento de la escritura, firma de las partes, testigo y escribano, debe hacerse en un solo acto. El escribano que contraviniera a esta disposición haciendo firmar a las partes o testigos en actos diferentes o fuera de la presencia de una y otras, será destituido, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pueda incurrir.

Art. 203. — Si el escribano no conociere a las partes, éstas pueden justificar ante él su identidad personal con dos testigos que el escribano conozca, poniendo en la escritura sus nombres y residencia y dando fe de que los conoce.

Art. 204. — Si los otorgantes fuesen representados por mandatarios, el escribano debe expresar que se le ha presentado el respectivo poder, transcribiéndolo en el libro del registro junto con la escritura. Lo mismo debe hacer cuando las partes se refieran a algún otro instrumento público. Pero si los instrumentos estuviesen otorgados en el registro del escribano, bastará que éste dé fe de hallarse en su protocolo, indicando la foja en que se encontraren.

Art. 205. — Son nulas las escrituras que no tuviesen la designación del tiempo y lugar en que fuesen hechas, el nombre de los otorgantes, la firma de las partes, la firma a ruego de ellas, cuando no sepan o no puedan escribir, la transcripción de las procuraciones o documentos habilitantes y la presencia y firma de los testigos en el acto. La inobservancia de las otras formalidades no anula las escrituras, pero los escribanos o funcionarios públicos pueden ser penados por sus omisiones con una multa que no baje de trescientos pesos ni exceda de mil.

Art. 206. — Es nula la escritura que no se halle en la página del protocolo donde según el orden cronológico debía ser extendida, siendo responsable el escribano de los daños y perjuicios que ocasione esta nulidad.

Art. 207. — El escribano debe dar a las partes que la pidiesen, copia autorizada de la escritura que hubiere otorgado.

Art. 208. — Siempre que se pidieren otras copias por haberse perdido la primera, el escribano deberá darlas; pero si en la escritura alguna de las partes se hubiese obligado a dar o hacer alguna cosa, la segunda copia no podrá darse sin autorización expresa del juez.

Art. 209. — Toda copia debe darse con previa citación de las partes interesadas en la escritura, las cuales pueden comparar la exactitud de la copia con la matriz. Si no existiesen o se hallasen ausentes, el juez podrá nombrar un oficial público que verifique la exactitud de la copia.

Art. 210. — Si hubiera alguna variación entre la copia y la escritura matriz, se estará a lo que ésta contenga.

Art. 211. — La copia de las escrituras de que hablan los artículos anteriores, hace plena fe como la escritura matriz.

Art. 212. — Los testimonios de las escrituras matrices contendrán la citación del registro y número que en él tenga la escritura con que concuerdan y deberán expedirse firmados y sellados por el escribano de registro y con las demás formalidades de derecho.

Art. 213. — Al expedir un testimonio, el escribano anotará al margen de la escritura matriz, la persona para quien se expida y la fecha.

Art. 214. — Los presidentes de las Cámaras de Apelación inspeccionarán las oficinas de registro cada tres meses ordinariamente, o antes si lo juzgaran oportuno, a fin de examinar si los registros están bien llevados y conservados en la forma que esta ley y reglamentos determinen, pudiendo decretar medidas disciplinarias por los defectos o abusos que notaren.

Art. 215. — Quedando vacante el puesto de algún escribano de registro, el juez civil en turno o de comercio, según el caso, procederá en el día a cerrar el registro del año, poniendo constancia del número de escrituras que contenga, fecha de la última que se hubiese otorgado y número de fojas del protocolo, firmando esa constancia con un secretario y signándola con el sello del juzgado.

Art. 216. — Toda queja contra los procedimientos de los escribanos en el ejercicio de sus funciones será llevada a conocimiento del juez de 1ª instancia, civil o comercial en turno, quien oír al interesado y al escribano y resolverá sumariamente en juicio verbal, con apelación para ante la Cámara respectiva.

TÍTULO XIV

Registro de la Propiedad, de Hipotecas, de Embargos e Inhibiciones

CAPÍTULO I

De los títulos que deben inscribirse

Art. 217. — Créase en la capital de la República una oficina de registro de propiedades, hipotecas, embargos e inhibiciones.

Art. 218. — En esta oficina se inscribirán:

- 1º Los títulos traslativos de dominio de inmuebles o derechos reales impuestos sobre los mismos;

2º Los títulos en que se constituyan, reconozcan, modifiquen o extingan derechos de hipoteca, usufructo, uso, habitación, servidumbre o cualquier otro derecho real;

3º Los actos o contratos en cuya virtud se adjudiquen bienes inmuebles o derechos reales, aun cuando sea con la obligación por parte del adjudicatario de transmitirlos a otros, o invertir su importe en objetos determinados;

4º Las sentencias ejecutoriadas que por herencia, prescripción u otra causa reconocieren adquirido el dominio o cualquier otro derecho real sobre inmuebles;

5º Los contratos de arrendamientos de bienes raíces por tiempo determinado, que exceda de un año;

6º Las ejecutorias que dispongan el embargo de bienes inmuebles o que inhiban a una persona de la libre disposición de los mismos.

Art. 219. — Las inscripciones ordenadas en el artículo anterior, sólo serán obligatorias para los títulos, actos o contratos celebrados con posterioridad al establecimiento del registro creado por esta ley, salvo lo dispuesto por el Código Civil en materia de hipotecas.

Art. 220. — Para que puedan ser inscriptos los títulos expresados en el artículo 218, deberán estar consignados en escritura pública, ejecutoria o documento auténtico.

CAPÍTULO II

De la forma y efectos de la inscripción

Art. 221. — Podrán solicitar indistintamente la inscripción de los títulos:

- 1º El que transmita el derecho;
- 2º El que lo adquiera;
- 3º El que tenga la representación legal de cualquiera de ellos;
- 4º El que tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir.

Art. 222. — Toda inscripción deberá contener, bajo pena de nulidad, las circunstancias siguientes:

- 1º La fecha de la presentación del título en el registro, con expresión de la hora;

- 2ª La naturaleza, situación, medida superficial y linderos de los inmuebles, objeto de la inscripción;
- 3ª La naturaleza, valor, extensión, condiciones y cargas de cualquiera especie del derecho que se inscriba;
- 4ª La naturaleza del título que se inscriba, y su fecha;
- 5ª El nombre, apellido y domicilio de la persona a cuyo favor se haga la inscripción;
- 6ª El nombre, apellido y domicilio de la persona de quien procedan inmediatamente los bienes o derechos que se deban inscribir;
- 7ª La designación de la oficina o archivo en que existe el título original;
- 8ª El nombre y jurisdicción del juez o tribunal que haya expedido la ejecutoria u ordenado la inscripción;
- 9ª La firma del encargado del registro.

Art. 223. — Si el título fuese un documento privado que haga constar un contrato de locación, deberá ser reconocido por los otorgantes ante el encargado del registro, quien lo agregará al protocolo con la debida constancia del reconocimiento.

Art. 224. — En la inscripción de los contratos en que haya mediado precio o entrega de dinero, se hará mención del que resulte del título, así como de la forma en que se hubiese hecho o convenido el pago.

Art. 225. — Si la inscripción fuese de traslación de dominio, expresará si ésta se ha verificado a título gratuito u oneroso, y si se ha pagado el precio al contado o se ha estipulado plazo; en el primer caso, si se ha pagado todo el precio, o qué parte de él; y en el segundo, la forma de plazo en que se haya estipulado el pago. Igualmente circunstancias se expresarán también si la traslación de dominio se verifica por permuta o adjudicación en pago, y si cualquiera de los adquirentes quedase obligado a abonar al otro alguna diferencia en dinero o efectos.

Art. 226. — Las inscripciones hipotecarias de crédito, expresarán en todo caso el importe y plazo de la obligación garantida y el interés estipulado, sin cuya circunstancia no considerará éste asegurado por la hipoteca.

Art. 227. — Las inscripciones de servidumbre se harán constar:

- 1º En la inscripción de propiedad del predio sirviente;

- 2º En la inscripción de propiedad del predio dominante.

Art. 228. — El cumplimiento de las condiciones suspensivas, resolutorias o rescisorias de los actos o contratos inscriptos, se hará constar en el registro, bien por una nota marginal, firmada por el encargado del registro, si se consuma la adquisición del derecho, o bien por una inscripción a favor de quien corresponda, si la resolución o rescisión llega a verificarse.

También se hará constar por medio de una nota marginal, siempre que los interesados lo reclamen o el juez lo mande, el pago de cualquier cantidad que haga el adquirente o deudor después de la inscripción.

Art. 229. — Inscripto en el registro cualquier título traslativo del dominio de los inmuebles, no podrá inscribirse ningún otro de fecha anterior por el cual se transmita o grave la propiedad del mismo inmueble.

Art. 230. — Las escrituras públicas de actos o contratos que deban inscribirse, expresarán por lo menos todas las circunstancias, que bajo pena de nulidad debe contener la inscripción y sean relativas a las personas de los otorgantes, a los bienes y a los derechos inscriptos.

Art. 231. — Sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Civil, respecto de las hipotecas, los actos o contratos a que se refiere la presente ley, sólo tendrán efecto contra terceros desde la fecha de su inscripción en el registro.

Art. 232. — Una vez establecido el registro creado por esta ley, ningún escribano podrá extender, aunque las partes lo solicitasen, escritura alguna que transmita o modifique derechos reales sin tener a la vista el certificado del encargado del registro, en que conste el dominio del inmueble y sus condiciones actuales, bajo pena de destitución del cargo, sin perjuicio de las responsabilidades civiles.

Art. 233. — Para determinar la preferencia entre dos o más inscripciones de una misma fecha, relativas al mismo bien, se atenderá a la hora de presentación en el registro, de los títulos respectivos.

Art. 234. — Se considera como fecha de la inscripción para todos los efectos que ésta deba producir, la fecha del asiento de la presentación que deberá constar en la inscripción misma.

Art. 235. — Las inscripciones de los títulos expresados en el artículo 218, serán nulas cuando carezcan de las circunstancias comprendidas en el artículo 221.

Art. 236. — La inscripción no revalida los actos o contratos inscriptos, que sean nulos con arreglo a las leyes.

Art. 237. — Las inscripciones en el Registro de la Propiedad, servirán como títulos supletorios en los casos en que se hubiesen extraviado los protocolos o escrituras matrices.

Art. 238. — Las inscripciones determinarán por el orden de su fecha la preferencia del título.

CAPÍTULO III

De las anotaciones preventivas

Art. 239. — Podrán pedir anotaciones preventivas de sus respectivos derechos.

- 1º El que demandare en juicio la propiedad, de bienes inmuebles o la constitución, declaración, modificación o extinción de cualquier derecho real;
- 2º El que en juicio ejecutivo obtuviere a su favor mandamiento de embargo que se haya hecho efectivo en bienes raíces del deudor;
- 3º El que en cualquier juicio obtuviere sentencia ejecutoria, que afecte derechos reales;
- 4º El que en juicio ordinario obtuviere providencia que ordene el embargo preventivo, o prohíba la enajenación de bienes raíces;
- 5º El que presentare algún título cuya inscripción no pueda hacerse definitivamente por falta de algún requisito subsanable;
- 6º El que en cualquier otro caso tuviere derecho a exigir anotación preventiva, de acuerdo con las leyes generales, o en virtud de resolución judicial.

Art. 240. — No podrá hacerse anotación preventiva sino por mandato judicial.

Art. 241. — El acreedor que obtenga anotación a su favor en los casos de los incisos 2º, 3º y 4º del artículo 238, será preferido en cuanto a los bienes anotados, a los que tengan contra el mismo deudor, otro crédito contraído con posterioridad a dicha anotación.

Art. 242. — Serán faltas subsanables en los títulos presentados a inscripción, para el efecto de anotarlos preventivamente, las que afecten a la validez del mismo título, sin producir necesariamente la nulidad de la obligación en él constituida.

Serán faltas no subsanables que impidan la anotación, las que produzcan necesariamente aquella nulidad.

Art. 243. — En todos los casos de anotación preventiva, podrá exigir el interesado que el jefe de la oficina le dé copia de dicha anotación, autorizada con su firma, y en la cual conste si hay o no pendientes de registro, algunos otros títulos relativos al mismo bien y cuáles sean éstos en su caso.

Art. 244. — Cuando la anotación preventiva de un derecho se convierta en inscripción definitiva del mismo, surtirá ésta sus efectos desde la fecha de la anotación.

Art. 245. — Las anotaciones preventivas comprenderán las circunstancias que exigen para las inscripciones los artículos 221, 222, 223, 224, 225 y 226.

Los que deban su origen a providencias de embargo, expresarán además las causas que los haya dado lugar, y el importe de la obligación que lo hubiese originado.

Art. 246. — Las anotaciones preventivas se harán en el mismo libro en que correspondría hacer la inscripción, si el derecho anotado se convirtiese en derecho inscripto.

CAPÍTULO IV

De la extinción de las inscripciones y anotaciones preventivas

Art. 247. — Las inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero sino por su cancelación, o por la inscripción de la transferencia del dominio o derecho real inscripto a otra persona.

Art. 248. — La cancelación de las inscripciones y anotaciones preventivas podrá ser total o parcial.

Art. 249. — Podrá pedirse y deberá ordenarse en su caso la cancelación total:

- 1º Cuando se extinga por completo el objeto de la inscripción;
- 2º Cuando se extinga también por completo el derecho inscripto;
- 3º Cuando se declare la nulidad del título en cuya virtud se hizo la inscripción;
- 4º Cuando se declare la nulidad de la inscripción por falta de algunos de sus requisitos esenciales, conforme a lo dispuesto en el artículo 236.

Art. 250. — Podrá pedirse y deberá decretarse en su caso la cancelación parcial:

1º Cuando se reduzca el bien objeto de la inscripción o anotación preventiva;

2º Cuando se reduzca el derecho inscripto.

Art. 251. — La ampliación de cualquier derecho inscripto será objeto de una nueva inscripción, en la cual se hará referencia a la anterior.

Art. 252. — Las inscripciones o anotaciones preventivas no se cancelarán sino mediante escritura pública, en la cual manifiesten su consentimiento la persona a cuyo favor se haya otorgado la primera, sus sucesores o representantes legítimos, o en virtud de providencia ejecutoria contra la cual no haya pendiente recurso alguno.

Art. 353. — La anotación preventiva se cancelará cuando se convierta en inscripción definitiva.

Art. 254. — La cancelación de toda inscripción contendrá precisamente las circunstancias siguientes:

1ª La clase del documento en cuya virtud se haga la cancelación;

2ª La fecha del documento y la de su presentación en el registro;

3ª El nombre del juez o tribunal que lo hubiese expedido, o del escribano ante quien se haya otorgado;

4ª Los nombres y domicilios de los interesados en la inscripción;

5ª La forma en que la cancelación se haya hecho.

Art. 255. — Será nula la cancelación:

1º Cuando no dé claramente a conocer la inscripción o anotación cancelada;

2º Cuando no exprese el documento en cuya virtud se haga la cancelación, su fecha, los nombres y domicilios de los otorgantes y del escribano o del juez en su caso;

3º Cuando no se exprese el nombre de la persona a cuya instancia o con cuyo consentimiento se verifique la cancelación;

4º Cuando, haciéndose la cancelación a nombre de persona distinta de aquella a cuyo favor estuviese hecha la inscripción o anotación, no resultare de la cancelación la representación con que haya obrado dicha persona;

5º Cuando en la cancelación parcial no se dé claramente a conocer la parte del inmueble que haya desaparecido o la

parte del derecho que se extinga y la que subsista;

6º Cuando no contenga la fecha de la presentación en el registro, del instrumento en que se haya convenido o mandado la cancelación;

7º Cuando se declare falso, nulo e ineficaz el título en cuya virtud se hubiese hecho;

8º Cuando se haya verificado por error o fraude.

CAPÍTULO V

Del modo de llevar el registro

Art. 256. — El registro establecido por esta ley se llevará con las mismas formalidades que los registros de los escribanos públicos.

Art. 257. — Sólo harán fe los libros que se lleven en la forma establecida en la presente ley.

Art. 258. — El registro se dividirá en dos secciones: una que se titulará «De la propiedad» y otra «De las hipotecas».

Cada sección se llevará en libros diferentes, numerados por orden de fechas.

Art. 259. — La sección del registro titulada «De la propiedad» comprenderá todas las inscripciones, anotaciones preventivas y cancelaciones de los títulos expresados en el artículo 218, con excepción de todo lo relativo a las hipotecas, embargos e inhibiciones.

Art. 260. — El registro «De la propiedad» se llevará abriendo uno particular a cada finca, asentando por primera partida la primera inscripción que se pida y agregando a continuación todas las inscripciones, anotaciones y cancelaciones posteriores sin dejar claros entre unos y otros asientos.

Art. 261. — Los asientos relativos a cada finca se numerarán y serán firmados por el encargado del registro.

Art. 262. — La sección del registro titulada «De las hipotecas» comprenderá las hipotecas, embargos e inhibiciones.

Art. 263. — En el registro «De las hipotecas» se asentarán todas las hipotecas, embargos e inhibiciones y su cancelación, así como las notas marginales que a los mismos hagan referencia.

Art. 264. — Las dos secciones de la oficina del registro llevarán un índice por orden alfabético según la letra que corresponda a la inicial del apellido del dueño de los bienes.

Art. 265. — Los libros índices por orden alfabético estarán divididos en seis columnas, en cada una de las cuales se anotarán:

En la primera, el nombre y domicilio de los otorgantes.

En la segunda, la fecha y clase del título en cuya virtud se haya constituido.

En la tercera, el número con que estuviere anotado el inmueble en el registro.

En la cuarta, la fecha en que se haya hecho la inscripción, el tomo y folio del registro.

En la quinta, la situación del inmueble.

En la sexta, la cancelación cuando se haga.

Art. 266. — El encargado de cada sección llevará además un libro llamado «Diario» en que extenderá un breve asiento de todo título que se lleve a la inscripción en el acto de recibirlo.

Art. 267. — Los asientos del diario se numerarán correlativamente en el acto de ejecutarlos.

Art. 268. — Los asientos de que trata el artículo anterior se extenderán por el orden con que se presenten los títulos sin dejar claros ni blancos entre ellos y expresarán:

- 1º El nombre, apellido y domicilio del que presente el título;
- 2º La hora de su presentación;
- 3º La especie del título presentado, su fecha y el nombre del juez, tribunal o escribano que lo subscriba;
- 4º La especie de derecho que se constituya, transmita, modifique o extinga por el título que se pretenda inscribir;
- 5º La naturaleza de la finca o derecho real que sea objeto del título presentado, con expresión de su situación;
- 6º El nombre, apellido y domicilio de la persona a cuyo favor debe hacerse la inscripción;
- 7º La firma del encargado del registro y de la persona que presente el título, o de dos testigos, si éste no pudiera firmar.

Art. 269. — Cuando se extienda en el libro correspondiente, la inscripción, anotación preventiva o cancelación a que se refiera el asiento del Diario, lo expresará así en éste, indicando el tomo y folio en que aquélla se hallare, así como el número que tuviere la finca en el registro y el que se haya dado a la misma inscripción solicitada.

Art. 270. — Al pie de todo título que se inscriba en el registro «De la propiedad» o en el «De las hipotecas», el encargado de sección pondrá una nota firmada por él, que exprese la especie de inscripción que se haya hecho, su fecha, la sección del registro, tomo y folio en

que se encuentren el número de la finca y el de la inscripción ejecutada.

Art. 271. — Ninguna inscripción se hará en el registro «De la propiedad», sin que se acredite previamente el pago de los impuestos establecidos por las leyes.

Art. 272. — Para que en virtud de providencia judicial pueda hacerse un asiento en el registro, expedirá el juez por duplicado el mandamiento correspondiente. El encargado del registro devolverá uno de los ejemplares al mismo juez que lo haya dirigido, con nota firmada en que exprese quedar cumplido, y conservará el otro en su oficina extendiendo en él una nota rubricada, igual a la que hubiere puesto en el ejemplar devuelto.

Estos documentos se archivarán en legajos, numerándolos por el orden de su presentación.

Art. 273. — Se conservarán también en legajos por orden de fechas, y numerados los títulos de otra especie en cuya virtud se concede total o parcialmente alguna obligación poniendo previamente en ellos la nota a que se refiere el artículo 269.

Art. 274. — Los libros del registro no se sacarán de la oficina, sino en caso de fuerza mayor.

CAPÍTULO VI

De la dirección e inspección del registro

Art. 275. — La sección titulada «De la propiedad», estará bajo la dirección de un abogado.

La sección titulada «De las Hipotecas», estará bajo la dirección de un escribano.

Art. 276. — Los encargados de cada sección consultarán con el presidente de la Cámara de lo Civil cualquiera duda que se les ofrezca sobre la inteligencia y ejecución de esta ley o de los reglamentos que se dicten para aplicarla.

Art. 277. — Corresponde a los encargados de cada sección:

- 1º Conservar y llevar el registro con arreglo a las disposiciones de la presente ley;
- 2º Formar anualmente un estado del movimiento de la propiedad, con arreglo a los datos que suministre el registro.

Art. 278. — Sin perjuicio de las disposiciones consignadas por el Código Civil para las faltas cometidas por los oficiales públicos, los encargados de sección responderán de los daños y perjuicios que ocasionen:

- 1º Por no asentar en el diario, no inscribir o no anotar preventivamente los títulos que se presenten al registro;
- 2º Por error o inexactitud cometida en inscripciones, cancelaciones, anotaciones preventivas o notas marginales;
- 3º Por no cancelar sin fundado motivo alguna inscripción, o anotación, u omitir el asiento de alguna nota marginal;
- 4º Por cancelar alguna inscripción, anotación preventiva o nota marginal, sin el título y requisito que exige la ley;
- 5º Por error u omisión en las certificaciones de inscripción o de libertad de los inmuebles o derechos reales.

CAPÍTULO VII

De la publicación del registro

Art. 279. — El registro será público para los que tengan interés justificado en averiguar el estado de los bienes inmuebles o derechos reales inscriptos.

Art. 280. — Podrán expedirse certificados:

- 1º De los asientos de todas clases que existan en el registro, relativos a bienes que los interesados señalen;
- 2º De asientos determinados que los mismos interesados designen;
- 3º De las inscripciones hipotecarias y cancelaciones hechas a cargo o en provecho de personas señaladas;
- 4º De no existir asiento de ninguna especie, o de especie determinada sobre líneas señaladas o a cargo de ciertas personas.

Art. 281. — La libertad o gravamen de los bienes inmuebles o derechos reales, sólo podrán acreditarse en perjuicio de tercero por los certificados enunciados en el artículo precedente.

Art. 282. — No se expedirán certificados sino por mandamiento judicial y con citación de partes, si las hubiere, o del ministerio fiscal en su defecto.

Art. 283. — Los mandamientos de los jueces expresarán con toda claridad:

- 1º La especie de certificación que de acuerdo con el artículo 280 se exige;
- 2º Las noticias que según la especie de certificación, basten para dar a conocer los bienes o personas de que se trate;
- 3º El período a que la certificación debe contraerse.

Art. 284. — Las certificaciones se darán de los asientos del Registro de la Propiedad y del de las Hipotecas o de uno y otro, según el caso.

También se darán de los asientos del Diario, cuando al tiempo de expedirla existiese alguno pendiente de inscripción en otros registros, que debiera comprenderse en la certificación pedida, y cuando se trate de acreditar la libertad de alguna finca o la no existencia de algún derecho.

Art. 285. — Cuando se ordenare dar certificación de una inscripción señalada y estuviese cancelada, deberá insertarse a continuación de ella, copia literal del asiento de cancelación.

CAPÍTULO VIII

Derechos a cobrar

Art. 286. — Los derechos por los asientos en los libros y las certificaciones, se cobrarán respectivamente por cada sección con arreglo al siguiente arancel:

\$ m/a.

- | | |
|---|------|
| 1º Por el examen y nota de presentación de cualquier título cuya inscripción se solicite | 0,50 |
| 2º Por las mismas diligencias, si el título se llevara para poner nota marginal | 0,25 |
| 3º Por cada inscripción que se haga en el Registro de la Propiedad o en el de Hipotecas | 1.— |
| 4º Además del emolumento que se fija por el inciso anterior, se cobrará por cada llana que ocupa la inscripción en el protocolo . . | 0,25 |
| 5º Por cada nota marginal, de cualquier naturaleza que fuese, que se hiciere en el Registro de la Propiedad o en el de Hipotecas . | 1.— |
| 6º Por la diligencia de ratificación de los interesados en alguna inscripción o anotación preventiva . | 0,50 |
| 7º Por la nota que debe ponerse en el título que se devuelve al interesado | 0,50 |
| 8º Por toda cancelación de cualquier inscripción o anotación preventiva | 1.— |
| 9º Por toda investigación que se haga en el Registro de la Propiedad o de Hipotecas, se cobrará por cada año | 0,12 |

10. Si fuese más de un apellido el que se buscara, se considerará una investigación por cada apellido, y se cobrará por año 0,12
11. Por todo certificado que se expida con referencia a los asientos de los protocolos, se cobrará por llana además de la investigación . . . 0,25
12. Las diligencias que los jueces decreten de oficio, se practicarán sin cobrar emolumento alguno, sin perjuicio de pagarse oportunamente por quien resulte obligado, y las que solicitaren los que hubiesen obtenido carta de pobreza y el fisco, gratuitamente.

Art. 287. — Los derechos serán pagados por aquel o aquellos a cuyo favor se haga la inscripción o certificación del derecho.

Art. 288. — Al pie de todo asiento, certificación o nota, se anotará el importe de los derechos cobrados.

TITULO XV

Archivo General de los Tribunales

Art. 289. — Créase una oficina que se denominará Archivo General de los Tribunales.

Art. 290. — Esta oficina estará a cargo de un escribano, y tendrá además los empleados que la ley determine.

Art. 291. — El archivo se formará:

- 1º Con los protocolos de todas las escribanías de registro existentes, con excepción de los cinco últimos que quedarán en poder de los escribanos de registro;
- 2º Con los expedientes archivados en las secretarías y demás oficinas de actuación o registro de la Capital.

Art. 292. — En los dos primeros meses del año, cada secretario de los tribunales de la Capital remitirá los expedientes que deban archivar y cada escribano de registro entregará a su vez el protocolo correspondiente, de modo que siempre queden en su poder los registros de los cinco años últimos.

Art. 293. — Los expedientes y protocolos serán recibidos por el archivero, previo examen de su estado, haciendo constar el número de sus páginas y las circunstancias especiales que se notaren; y los devolverá si encontrase alguna irregularidad o infracción a las leyes

fiscales, dando cuenta de ellos a la autoridad competente.

Art. 294. — El archivo será organizado por orden de oficinas, colocando con separación los expedientes y protocolos que a cada una correspondan.

El jefe del archivo formará índices especiales de cada oficina y dos índices generales del archivo, uno de escrituras y otro de expedientes.

Art. 295. — El archivo será organizado sucesivamente, comenzando por las oficinas más antiguas.

Para la formación de los índices, se examinarán las escrituras y expedientes.

Los índices de las escrituras expresarán los nombres de los otorgantes, fechas de las escrituras, nombres de los escribanos y oficinas y objetos de ellas.

Los índices de los expedientes determinarán los nombres de las partes, juez, oficina actuaria, y objeto del juicio.

Art. 296. — Los protocolos no podrán ser extraídos del archivo, sino en caso de fuerza mayor.

Art. 297. — Los expedientes sólo podrán salir del archivo en virtud de orden escrita de un juez, por el término de sesenta días, vencidos los cuales el archivero exigirá la devolución, que no podrá ser demorada sino por causa justificada, bajo pena de multa de doscientos pesos para el que ocasionare el retardo.

Art. 298. — El archivero general expedirá testimonio de las escrituras, expedientes y demás documentos del archivo, así como de los certificados que se expidieren, observando las mismas formalidades prescriptas para los escribanos de registro.

Art. 299. — Esta oficina no percibirá derecho alguno por los testimonios o certificados que expida.

Los interesados entregarán los sellos para su expedición, cuyo valor fijará la ley.

Art. 300. — Los registros y archivos son de propiedad pública, y los que actualmente fueren de propiedad particular, pasarán al dominio público, previa indemnización, si a ello hubiere lugar con arreglo a la ley de expropiación.

Art. 301. — Los dueños de oficinas que renuncien a la indemnización, tendrán el derecho de presentar en cualquier tiempo y por una sola vez, un escribano que desempeñe la oficina.

Art. 302. — Los que siendo escribanos, solicitaren indemnización, perderán sus derechos

Agosto 20 de 1885

CAMARA DE SENADORES

30ª Reunión. 27ª Sesión ordinaria

al registro, y el Poder Ejecutivo nombrará otro escribano en su lugar, dado caso que se acordase la indemnización.

Art. 303. — El escribano encargado del archivo, deberá dar la misma fianza que los escribanos de registro, por el tiempo que dure en el ejercicio de su empleo.

Art. 304. — El escribano encargado del archivo y los empleados de esta oficina, serán nombrados y removidos por el presidente de la República, y gozarán del sueldo que la ley del presupuesto determine.

TITULO XVI

Disposiciones complementarias

Art. 305. — A los efectos de la ley sobre justicia de paz, la Capital queda dividida en 10 secciones.

Art. 306. — Habrá cinco jueces de primera Instancia de lo Civil, dos de Comercio, uno de lo Correccional, tres de Instrucción y dos de Sentencia en lo Criminal. La Cámara distribuirá el trabajo.

Art. 307. — Los jueces de lo Civil y Comercial tendrá cada uno seis secretarios, dos cada uno de los de lo Criminal, de Instrucción y de Sentencia.

Art. 308. — El abogado y escribano a que se refiere el artículo 273, serán nombrados y removidos por el presidente de la República.

Art. 309. — Habrá dos agentes fiscales para lo Civil y Comercial y dos para lo Criminal y Correccional.

Art. 310. — La defensoría de menores e incapaces será desempeñada por dos defensores y dos asesores letrados.

Art. 311. — Los tribunales de la Capital se regirán por las leyes de procedimientos civiles, comerciales y criminales que actualmente rigen para los de la provincia de Buenos Aires, en cuanto sean compatibles con la presente ley y hasta tanto se dicten por el Congreso las que hayan de subrogarlas.

Art. 312. — Hasta tanto se dicte el Código Penal de la República, continuará rigiendo en la Capital el código vigente en la provincia de Buenos Aires.

Art. 313. — Queda vigente el arancel que rige actualmente en la provincia de Buenos Aires, para los derechos de los escribanos de registro y hasta tanto sea revisado por el Congreso.

Art. 314. — Comuníquese, etc.

Sr. Presidente. — Ha terminado la orden del día. Queda levantada la sesión.

—Eran las 5 y 15 p. m.